



Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU)
Donostia – San Sebastián

Curso 2020-2021

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LA CIUDADANÍA:
NORMATIVA, LENGUAS MINORITARIAS
Y CONTROVERSIAS.**

Trabajo realizado por Uxue Marcos Aguirre

Dirigido por Miren Karmele Azkarate Villar

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.	3
1.1 El lenguaje y la lengua.	4
1.2 El derecho a la lengua.	5
2. NATURALEZA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS.	6
2.1 ¿Son los derechos lingüísticos derechos humanos?	7
2.2 Elementos caracterizadores de los derechos lingüísticos.	8
3. MARCO TEÓRICO GENERAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS.	9
3.1 La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.	11
3.1.1 El objetivo de la Declaración.	12
3.1.2 Los artículos de la Declaración.	14
4. NORMATIVA OFICIAL DE LAS LENGUAS MINORITARIAS.	18
4.1 La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.	20
4.2 Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.	23
5. DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.	26
5.1 Protección constitucional.	27
5.2 Normativa autonómica.	28
5.2.1 Comunidad Autónoma Vasca.	30
5.2.2 Comunidad Foral de Navarra.	34
5.2.3 Comunidad Autónoma de Cataluña.	37
5.2.4 Comunidad Autónoma de Galicia.	39
6. CONTROVERSIAS.	41
6.1 Lengua vehicular tras la Ley Celaá.	42
6.2 Inmersión lingüística tras la Ley Molac.	43
7. REFLEXIONES FINALES.	44
8. FUENTES.	46

1. INTRODUCCIÓN.

En el mundo existen más de 7.000 lenguas diferentes, sin embargo, no todas se consideran oficiales. Según la RAE, un idioma es la lengua de una nación y en consecuencia, un idioma se considerará oficial cuando así se exprese en el texto constitucional. En la práctica, la lengua oficial de una nación sirve como método de comunicación en las instituciones públicas, entre los habitantes y en sectores como la educación o la sanidad. Ahora bien, esta idea introductoria lleva a cuestionarse cómo se garantiza el uso de todas las lenguas existentes y si todas ellas están amparadas por una normativa efectiva aún no siendo oficiales.

En todo caso, no cabe duda de que el fenómeno de la globalización, los flujos migratorios y el auge de las nuevas tecnologías han contribuido a vivir en una sociedad con mayor diversidad lingüística y, como en otras múltiples áreas, es necesario adaptarse a las nuevas necesidades así como brindar un adecuado amparo a las posibles controversias que suscite el plurilingüismo.

En este sentido, el plurilingüismo ha sido objeto de estudio en sus diversas facetas, convirtiéndose así en un elemento que requiere de protección ya que todas las lenguas son esenciales y de ahí, que hablar de su importancia relativa se considere equivalente a invocar diferencias discriminatorias entre etnias, razas o identidades¹.

Así, el presente trabajo tratará de establecer un marco teórico general sobre los derechos lingüísticos y la protección que se les ha brindado en las últimas décadas, partiendo de una introducción sobre cómo se definen los conceptos de lenguaje y lengua y cuál es la razón de ser del derecho a la lengua. El análisis se ha orientado desde una perspectiva internacional a una perspectiva nacional, en el cual adquieren relevancia la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, la Constitución Española y la normativa de algunas de las Comunidades Autónomas Españolas. Por su parte, y antes de entrar en las reflexiones finales generadas en consecuencia del entramado de las siguientes páginas, se traen a colación dos de las controversias más señaladas y actuales, el catalán tras la reforma de la Ley Celaá y las lenguas regionales tras el recurso de la Ley Molac. Finalmente, se

¹ MORENO FERNÁNDEZ, F., "La importancia internacional de las lenguas", *Informes del Observatorio*, Instituto Cervantes, 2015, p. 2

introducirán las iniciativas existentes para que se desarrolle una adecuada protección a los derechos lingüísticos y se impulse la utilización de todas las lenguas.

1.1 El lenguaje y la lengua.

Todo ser vivo está en interacción continua con el medio en que se desenvuelve, de modo que capta los acontecimientos que surgen a su alrededor, y al mismo tiempo, su propia actuación repercute en el comportamiento de los demás seres. La existencia de una comunidad de individuos parece exigir el intercambio de información entre sus miembros, esto es, la posibilidad de algún tipo de comunicación entre sus componentes ². En efecto, el lenguaje actúa como cauce de comunicación entre los seres humanos. La capacidad del lenguaje, intrínseca a la persona, se manifiesta a través de la lengua y diversos filósofos a lo largo de la historia han expresado que la capacidad de hablar es algo que unifica al género humano y lo distingue del resto de los seres vivos. Para Chomsky, *“el lenguaje es una fuente privilegiada puesto que es una propiedad exclusivamente humana sin parangón en el reino animal, unánimemente reconocida como tal en el mundo científico”*³.

De esta manera, la lengua es una entidad abstracta y es definida por la RAE como un *“sistema de comunicación verbal propio de una comunidad”*. Tan es así que la lengua es producto de una convención social, que el ser humano adquiere de forma natural a través de la herencia cultural del territorio donde está ubicado y en definitiva, es un concepto sinónimo del idioma. Por su parte, las variedades lingüísticas son las diversas formas que puede adquirir una lengua y ello deriva, entre otros, de elementos históricos, geográficos y sociales. Así, por ejemplo, se aprecian diferencias entre la lengua española que se utiliza en España y en Colombia, de la misma forma que el dialecto andaluz difiere del canario o la forma de hablar de un niño es distinta a la de un adulto. En palabras de Lagerspetz, las diferencias lingüísticas *“tienen un significado social y político que es independiente de la perspectiva romántica-nacionalista de la lengua”* y siendo esa su naturaleza pueden *“generar reclamos morales que pueden ser*

² ROJO, G., “El lenguaje, las lenguas y la lingüística”, *Lalia*, Universidad de Santiago de Compostela, 1986, p. 6

³ ESCUTIA, M., “Chomsky, la naturaleza humana, el lenguaje y las limitaciones de la ciencia”, *Grupo Ciencia, Razón y Fe*, Facultad de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, p.3

formulados como derecho”⁴. Prosigue el autor explicando que, teniendo en cuenta que el lenguaje es esencial para la vida cotidiana, el dominio de una lengua, si adquiere carácter oficial, sirve para ser “*usada en las administraciones, tanto públicas como privadas, para poder hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes y por último, la posibilidad de ser miembro pleno de la polis democrática solo se da si el sujeto puede participar en la discusión democrática.*”⁵

1.2 El derecho a la lengua.

La aparición del Estado Liberal configuró el orden jurídico-político de los estados donde se establecía el sometimiento a las leyes y a las constituciones dejando de lado los regímenes absolutistas que habían caracterizado la historia precedente. Este nuevo modelo brindaba a la persona, en base a los conceptos de libertad e igualdad que se proclamaron, el reconocimiento de unos derechos universales. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XX, los Estados Liberales se caracterizaban en ser un solo pueblo indiferenciado cultural y jurídicamente, lo que conllevaba que los grupos “diferentes”, aún teniendo reconocidos derechos y libertades, tenían que integrarse en la homogeneidad establecida. En el terreno lingüístico, en consecuencia de la explicación anterior, el uso de la lengua, actualmente reconocido como el derecho a la lengua, también estaba a merced del reconocimiento de una lengua en concreto, caracterizando las demás como simples hablas o dialectos cuyo uso tenía cabida de forma generalizada en el ámbito privado.

Sin embargo, las décadas posteriores, caracterizadas por guerras, pobreza y tragedia, han dejado patente que la proclamación de tales valores sólo estaban dirigidos al “hombre, blanco y rico” y no fue, hasta la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuando se establecieron valores verdaderamente universales como la diversidad, la tolerancia y el respeto, donde tienen cabida los derechos lingüísticos. Así, dicho acontecimiento fue el que reconoció por primera vez, entre otras, la pluralidad lingüística que siempre ha existido en el mundo.

⁴ LAGERSPETZ, E., “Sobre los derechos lingüísticos”, *Isonomía, Revista de teoría y filosofía del derecho*, Nº15, octubre 2001, pp. 109-130

⁵ *Ibid.*, p.110

En consecuencia de tal reconocimiento se estableció el estatuto jurídico de las lenguas, que tienen una primera categorización, a saber, existen lenguas oficiales y propias. Fuera de las regulaciones jurídicas quedan otros términos comúnmente utilizados según el alcance o reconocimiento social que estas adquieren y de esta forma, se habla de lenguas nacionales y de lenguas minoritarias. En este sentido, el derecho al uso de las mismas, tanto nacionales como minoritarias, deberá garantizarse explícitamente y todas ellas gozarán de promoción en alguna medida, y con toda probabilidad se proclamará la especial protección de las que se consideran más débiles.

Tan es así que, superada la idea de que el derecho a la lengua pertenece a toda persona debe tenerse en cuenta que las lenguas forman parte de los patrimonios culturales nacionales en los cuales la persona también tiene derecho a la autonomía cultural. Esta forma de autonomía, susceptible de ser ejercida individual o colectivamente, es la que permite que se practique y cultive el idioma libremente escogido, como una expresión más de libertad, posible sólo en un Estado constitucional. Además, el derecho a la lengua, en tanto que supone una decisión sobre el uso de una o varias, tiene efectos de carácter jurídico porque implica, como en toda relación sinalagmática, una serie de obligaciones por parte del ente ante quien se ejerce el derecho. En este caso, la autonomía cultural significa, ante terceras personas, el deber de respeto, y ante los entes públicos, el deber de auxilio⁶.

2. NATURALEZA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS.

El elemento principal de los derechos lingüísticos es el derecho a la lengua, como ya se ha mencionado, que supone el derecho a expresarse y a comunicarse en la lengua propia. En palabras de Soriano Díaz, el derecho a la lengua *“es un derecho abstracto y genérico, que se concreta en una serie de derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos son las manifestaciones o vías de desarrollo de este genérico derecho a la lengua, que se desglosan en los siguientes derechos: el derecho a expresarse y ser atendido en la lengua propia ante los poderes públicos, el derecho a ser informado en la lengua propia y el derecho a ser informado en la lengua propia en*

⁶ VALADÉS, D., “El derecho a la lengua”, *Teoría y Realidad Constitucional*, num. 18, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 286-289

los medios de comunicación social”⁷. Pues bien, partiendo de los adjetivos que utiliza el autor, se considera derecho abstracto a aquel que no está del todo concretado aunque ello no signifique que sea insuficiente o carente de contenido. En la esfera de los derechos lingüísticos esta referencia hace alusión a que el derecho a la lengua es un derecho subjetivo, es decir, que se concreta en la voluntad de cada individuo. De esta manera, es la persona, individualmente considerada, la que decide si hace uso del derecho a la lengua, de qué manera y con qué alcance. En palabras de Herszenbaun los derechos abstractos *“imponen principios formales o una cierta normatividad de carácter mínimo”*⁸. Ahora bien, para los casos en los que no se pueda garantizar el uso del derecho a la lengua de forma absoluta, y teniendo en cuenta el objetivo de proteger el derecho a la lengua, existen diferentes textos normativos que garantizan que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho de usar la lengua minoritaria en cualquier contexto, como se analizará en los apartados posteriores. De la misma manera, que el derecho a la lengua sea un derecho genérico tampoco significa que no tenga especificidades, que en este caso se determinan a través del reconocimiento de los derechos lingüísticos y en consecuencia, estos tendrán carácter de derechos específicos.

Además, y antes de entrar al análisis detallado de la naturaleza de los derechos lingüísticos, es fundamental subrayar la protección especial que requieren las lenguas minoritarias, y dentro de ellas distinguir entre la lengua como tal, entendida como un idioma, y las personas que hacen uso de dicha lengua, apreciadas como miembros de un grupo que se comunica a través de una lengua minoritaria. Ambos conceptos están relacionados y precisan de protección, porque tal y como aclara Soriano Díaz *“los derechos lingüísticos se esgrimen cuando la lengua que se habla es minoritaria y por ello tiene dificultades de uso”*⁹.

2.1 ¿Son los derechos lingüísticos derechos humanos?

En los últimos 60 años, ha sido muy polémica la idea de que los derechos lingüísticos deberían tener el estatus de un derecho humano fundamental y ser reconocidos como tal por los Estados nacionales y las organizaciones internacionales. La

⁷ SORIANO DÍAZ, R., “Derechos lingüísticos y derechos fundamentales”, *Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, Nº41, 1999, p. 197

⁸ HERSZENBAUN, MA., “DERECHO ABSTRACTO Y ESTADO JURÍDICO EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO HEGELIANO”, *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, nº 21, enero 2015, p. 26

⁹ SORIANO DÍAZ, R., “Derechos lingüísticos...”, *op. cit*, p. 198

polémica no radica en el uso de la lengua en el ámbito privado puesto que eso coincide con la protección de los derechos humanos individuales, sino en si los hablantes de lenguas minoritarias tienen derecho a mantener y utilizar esa particular lengua en el ámbito público o cívico¹⁰. Explica Soriano Díaz que *“los derechos lingüísticos podrían ser considerados como derechos humanos con facilidad, puesto que derivan del progresivo enriquecimiento de los derechos de la primera generación o derechos de libertad, pero tendrían dificultad en ser catalogados como derechos fundamentales propiamente dichos en nuestro ordenamiento jurídico, a los que pudiera aplicarse la protección especial indicada por el constituyente en cuanto al respeto al contenido esencial, las garantías procesales, la reserva legal y la reforma constitucional”*¹¹. Es decir, partiendo de la principal distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, a saber, la limitación territorial a la que se ciñen los segundos en comparación con los primeros, calificar los derechos lingüísticos como derechos fundamentales supondría que estos además de estar recogidos en el texto constitucional, tendrían que estar revestidos de las garantías que la Constitución brinda a sus preceptos. Actualmente, de las 180 Constituciones que existen a nivel mundial, sólo 22 no contienen referencias a las lenguas¹², sin embargo, será el estudio detallado de cada una de las constituciones las que determinará si el derecho a la lengua reviste el carácter de derecho fundamental.

Por tanto, la cuestión necesita una respuesta que no sea ambigua, y aunque no exista un acuerdo total y común, partiendo de la reducida presencia de derechos lingüísticos en los instrumentos internacionales, apunta Pons Perera que *“su protección se ha instrumentado a través de los derechos humanos, deduciendo de los mismos un contenido lingüístico”*¹³. Por tanto, los derechos lingüísticos son derechos humanos que repercuten en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades.

¹⁰ MAY, S., “Derechos lingüísticos como derechos humanos”, *Revista de Antropología Social*, 2009, pp. 147.

¹¹ SORIANO DÍAZ, R., “Derechos lingüísticos...”, *op. cit.*, p. 199

¹² VALADÉS, D., “El derecho a la lengua”, *op.cit.*, p. 276

¹³ PONS PERERA, E., *“Los derechos lingüísticos en el marco internacional y comunitario europeo”*, Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España, 2006, p. 74

2.2 Elementos caracterizadores de los derechos lingüísticos.

El lenguaje es al mismo tiempo, una facultad individual de comunicación del ser humano y un producto social, fruto del acuerdo de un grupo de seres humanos en cuanto a los signos que forman el código de comunicación del grupo al que pertenecen. Esta doble vertiente del lenguaje –individual y social- caracteriza la legislación dirigida a la defensa y protección de los derechos lingüísticos ya que esta se ha elaborado, por un lado, considerando a la persona como sujeto al que se le confieren derechos personales e intrínsecos y, por otro lado, considerando a la persona como miembro perteneciente a una comunidad. En efecto, los derechos lingüísticos *“son esencialmente derechos reconocidos en favor de los ciudadanos, que se configuran como derechos de libertad, estrechamente vinculados al ámbito más íntimo de la personalidad, que pretenden garantizar un espacio propio y sin injerencias a su libre desarrollo”*¹⁴. Esto implica el derecho de cada individuo a aprender y desarrollar libremente su propia lengua materna, a recibir educación pública a través de ella, a usarla en contextos oficiales socialmente relevantes, y a aprender por lo menos una de las lenguas oficiales de su país de residencia. En el nivel de las comunidades lingüísticas los derechos lingüísticos comprenden el derecho colectivo de mantener su identidad y alteridad etnolingüísticas¹⁵.

Es necesario, por su parte, realizar una distinción entre legislación lingüística y política lingüística que permitirá concebir mejor el carácter de los derechos lingüísticos. Mientras que la primera se ciñe a la normativa referente a los derechos lingüísticos, la segunda va más allá de las disposiciones de orden lingüístico que toma y aplica un gobierno, y se concibe para promover el uso de una lengua concreta en las instituciones del estado, que permite abarcar un espectro mucho más amplio y determinante, implicando a sectores y materias tan diversas como la educación, la inmigración, o la sanidad. A saber, la legislación lingüística, que será objeto de estudio de los próximos, debe regular los derechos lingüísticos respetando los principios internacionales y valores constitucionales. Es importante tener en cuenta, tal y como recalca Segura que *“en una situación de libre mercado idiomático, esta tendencia provoca la competición*

¹⁴ ALBERTÍ ROVIRA, E., *“El régimen de doble oficialidad y los derechos y deberes lingüísticos”*, Estudios Jurídicos sobre la Ley de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1999, p. 101

¹⁵ HAMEL RAINER, E., *“Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas”*, *Alteridades*, Vol. 5, nº10, 1995, p. 17.

lingüística y acaba frecuentemente en la supremacía de la lengua más fuerte. Dicho esto, la política lingüística tiene por objetivo influir en este proceso, modificando las reglas del libre mercado lingüístico con medidas administrativas y jurídicas¹⁶”.

En todo caso, y como explica May (2009) haciendo suya la distinción que realiza el sociolingüista Heinz Kloss (1977)¹⁷, los derechos lingüísticos tienen una división en base a si están “orientados a la tolerancia” y “orientados a la promoción”. Los primeros aseguran el derecho a preservar una lengua en la esfera privada y no gubernamental de la vida nacional. Estos derechos podrían estar definidos restringida o ampliamente. Incluyen el derecho de los individuos a usar su lengua materna en privado o en público, con libertad de reunión y organización, el derecho a establecer instituciones privadas culturales, económicas y sociales en donde esta lengua pueda ser utilizada, y el derecho a promoverla en las escuelas privadas. En cambio, los segundos regulan el grado en el que esos derechos se reconocen dentro del dominio público o en el ámbito cívico de la nación-Estado. En su vertiente más amplia, estos derechos podrían implicar el reconocimiento de una lengua minoritaria en todos los ámbitos formales dentro de la nación-Estado¹⁸.

3. MARCO TEÓRICO GENERAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS.

La proclamación expresa de los derechos lingüísticos por los instrumentos internacionales, y la elaboración de una doctrina internacional al respecto, es un fenómeno relativamente reciente, cuyo auge se sitúa a partir de la década de los 80 ya que hasta entonces solo existía la presencia aislada de los derechos de contenido lingüístico en los textos internacionales sobre derechos humanos¹⁹.

Entre ellos es conveniente destacar el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH) que dispone que *“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen*

¹⁶ SEGURA, B., “Derechos lingüísticos”, *El Notario del Siglo XXI*, Nº23, enero-febrero 2009, p. 58.

¹⁷ KLOSS, H., “The American Bilingual Tradition”, Rowley: Newbury House, 1977

¹⁸ MAY, S., “Derechos lingüísticos”, *op. cit.*, pp. 132-134

¹⁹ PONS PERERA, E., “Los derechos lingüísticos...”, *op. cit.*, p. 66

*nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición*²⁰”. Así, la razón de ser del artículo es recoger el principio de no discriminación en sus diversas manifestaciones, entre las que se encuentra el idioma. El principio erige así la protección de los derechos lingüísticos de las personas como límite de las políticas lingüísticas. Por su parte, la misma atención requiere el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece que *“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma*²¹”. Este precepto impone un deber negativo de los Estados nacionales relativo a la protección de las lenguas y culturas de los grupos minoritarios²² (se tratará en profundidad en el apartado 4). Ahora bien, la clausula inicial ha permitido que algunos estados no concibieran la aplicación del precepto por negar que existiera cualquier minoría dentro de su jurisdicción²³. Sin embargo, como aclara May *“este patrón de evasión se ha abordado más recientemente por nuevas directrices en la Observación General del Pacto, aprobada en abril de 1994, donde se estipula que el Estado ya no puede determinar por sí solo si una minoría existe o no en su territorio*”. Finalmente, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales hace una alusión similar a la no discriminación por razón del idioma como se hace en la DUDH. En todo caso, y de la literalidad de los preceptos citados se extrae que la prohibición de la discriminación por motivos lingüísticos y otras disposiciones similares basadas en la igualdad impone la obligación al Estado de establecer preferencias lingüísticas razonables y no arbitrarias. Esta obligación no afecta a la competencia de los Estados para determinar su idioma o idiomas oficiales, sino que establece que las políticas, preferencias o prohibiciones lingüísticas deben ser acordes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos²⁴.

²⁰ Asamblea General de las Naciones Unidas. "Declaración Universal de los Derechos Humanos." 217 (III) A. Paris, 1948.

²¹ Asamblea General de las Naciones Unidas. "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". 2200 (XXI) A. Nueva York, 1966

²² MAY, S., "Derechos lingüísticos, *op. cit.*, p. 140

²³ *Ibidem.*

²⁴ Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, "Derechos lingüísticos de las minorías lingüísticas", Ginebra, marzo 2017, p. 14

Algunas décadas después, tras la observación de la necesidad de una mayor protección de los grupos minoritarios, comienzan a proliferar textos en varias organizaciones universales y europeas que se refieren al derecho al uso de la propia lengua y a sus ámbitos de proyección. Estas responden tanto a iniciativas públicas como privadas y por ello, unas han adquirido carácter oficial y otras no. En todo caso, ello supone una novedad frente a la anterior presencia aislada de derechos de contenido lingüístico en los textos internacionales sobre derechos humanos²⁵. Sin embargo, aunque continúe sin existir un tratado o convención multilateral de alcance universal destinado específicamente a proteger los derechos lingüísticos, se han elaborado dos iniciativas para regular los derechos lingüísticos que se tratarán en los apartados siguientes, a saber, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos²⁶ y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias²⁷.

3.1 La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.

La iniciativa más importante hasta hoy es la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (en adelante DUDL), texto aprobado por la Conferencia mundial de los Derechos Lingüísticos, celebrada en Barcelona en junio del año 1996, y elevado a la UNESCO para su aprobación. En consecuencia, no es una iniciativa gubernamental, ni tampoco oficial, al contrario que la Carta Europea que se analizará en el siguiente apartado. Sin embargo, es el texto que recoge de forma más amplia el contenido de los derechos lingüísticos, otorgando un gran espacio a la regulación de las lenguas minoritarias (cuyo estudio se realizará en profundidad en el apartado 4). Este documento es el fruto de un proceso iniciado en septiembre de 1994, en el que intervinieron 97 organizaciones no gubernamentales de los cinco continentes y 41 especialistas del ámbito lingüístico, con el apoyo moral y técnico de la UNESCO²⁸.

La propuesta de escribir la Declaración surgió durante una sesión extraordinaria del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Club Internacional,

²⁵ PONS PERERA, E., *“Los derechos lingüísticos...”, op. cit*, p. 66

²⁶ Asamblea General de las Naciones Unidas. "Declaración Universal de los Derechos Humanos." 217 (III) A. Paris, 1948.

²⁷ Consejo de Europa. "Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o regionales hecha en Estrasburgo el 15 de noviembre de 1992", BOE num 222, de 15 de septiembre de 2001, pp. 34724-34749.

²⁸ *Ibid.*, p. 85

celebrada en Palma de Mallorca en diciembre de 1993²⁹. Explica Oriol Ramón i Mimo, Secretario General del Comité de Seguimientos de la DUDL que *“La Declaración es un documento largo y complejo. No podía ser de otra manera, ya que el tema en si es complejo, y más cuando la voluntad de los redactores se centró en recoger, lo más democráticamente posible, las opiniones expresadas por muchas personas y organizaciones de todo el mundo”*³⁰. Por tanto, aunque la DUDL no tenga carácter oficial y como tal no sea vinculante para todas las partes, ha recibido un indudable apoyo institucional y de expertos en la materia, como no podría ser de otra manera debido a la gran importancia que tienen las lenguas como elemento esencial de las personas.

En este contexto, varias personas reconocidas aportaron palabras de apoyo durante la redacción de la DUDL de las que se destacan las de Rigoberta Menchu: *“Estoy convencida que el idioma es el vínculo que permite pensar de acuerdo a los conocimientos y la forma de ver el mundo de una cultura, de un pueblo determinado, que ha heredado de sus antepasados, y que permite, asimismo, transmitirlos a las nuevas generaciones”*³¹. Por su parte, Dalai Lama expuso que *“creo que todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho de conservar su herencia lingüística y cultural. El estímulo y la promoción de éstos enriquecerán de forma importante la diversidad lingüística y cultural de nuestro mundo”*³².

Actualmente, en su condición de referente doctrinal en la materia expresa Pons Perera que *“la DUDL contiene una catalogación sistemática de derechos lingüísticos individuales y colectivos con vocación de universalidad, fija algunos conceptos generales del derecho lingüístico y proclama una serie de prerrogativas aplicables a una gran diversidad de situaciones sociolingüísticas, promoviendo una concepción de la diversidad lingüística como patrimonio de la humanidad y herencia a preservar”*³³. Con todo, los próximos subapartados analizarán de forma más exhaustiva el contenido de la DUDL.

²⁹ Comité de seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, *“Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos”*, Barcelona, abril 2009, p. 8

³⁰ Ibidem.

³¹ Ibid., p. 14

³² Ibid., p.44

³³ PONS PERERA, E., *“Los derechos lingüísticos...”, op. cit*, p. 85

3.1.1 El objetivo de la Declaración.

Uno de los esfuerzos de los redactores fue definir unos derechos lingüísticos equitativos, sin subordinarlos al estatus político o administrativo del territorio al cual pertenece la comunidad lingüística, ni a criterios como el grado de codificación o el número de hablantes. En este sentido, la DUDL no hace distinción alguna sobre el carácter que han adquirido las diferentes lenguas existentes y en consecuencia, no se perciben diferencias entre lenguas oficiales / no oficiales, nacionales / regionales / locales, mayoritarias / minoritarias, o modernas / arcaicas³⁴. La razón de esta anterior afirmación radica en que uno de los principales objetivos de la DUDL fue promover los derechos lingüísticos, y teniendo en cuenta que estos se ubican en un plano de igualdad, no pueden encontrarse entre las calificaciones de las lenguas diferencias. Así, en palabras de Oriol Ramón i Mimo, Secretario General del Comité de Seguimiento de la DUDL *“la Declaración considera como ejes de la comunidad lingüística: la historicidad, la territorialidad, la auto identificación como pueblo y el hecho de haber desarrollado una lengua común como medio normal de comunicación entre sus miembros”*³⁵. Es por ello que define, la lengua propia de un territorio como el idioma de la comunidad históricamente establecida en un determinado espacio y brinda una perspectiva más amplia que la de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, al no ceñirse solo a las lenguas minoritarias aunque sean extensas las referencias que se hacen a estas últimas. Prosigue el Secretario General, respecto a las comunidades lingüísticas que han sufrido desplazamientos por diversas causas, disponiendo que *“la necesidad de preservar los derechos lingüísticos de colectividades desplazadas de su territorio histórico (ya sea por migración, deportación o otras causas), de manera que sean compatibles con los derechos de la comunidad lingüística del lugar de destino ha sido contemplada en la conceptualización del grupo lingüístico, entendido como una colectividad humana que comparte una misma lengua y que está asentada en el espacio territorial de otra comunidad lingüística, pero sin una historicidad equivalente”*³⁶. Así, el prisma de protección se amplía atendiendo a las circunstancias que caracteriza el panorama del mundo actual.

³⁴ Comité de seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, *“Declaración Universal...”, op. cit*, p. 9

³⁵ *Ibid.*, p. 11

³⁶ *Ibidem.*

Por tanto, el objeto de la DUDL debe ser enfocado desde varias perspectivas. En primer lugar, y atendiendo a una visión política, la DUDL pretende concebir una organización de la diversidad lingüística que permita la participación efectiva de las comunidades lingüísticas en el modelo de crecimiento que vive la sociedad en la actualidad. En segundo lugar, desde una perspectiva cultural, la DUDL considera plenamente compatible el espacio comunicativo mundial con la participación equitativa de todos los pueblos, de todas las comunidades lingüísticas y de todas las personas en el proceso de desarrollo. Por último, desde una perspectiva económica, la protección de los derechos lingüísticos consiste en fundamentar un desarrollo sostenible basado en la participación de todas las personas y en el respeto por el equilibrio ecológico de las sociedades y por unas relaciones equitativas entre todas las lenguas y culturas³⁷. En este sentido, la Declaración es un texto necesario, tal como manifiestan sus Preliminares, para *“corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que asegure el respeto y el pleno despliegamiento de todas las lenguas y que establezca los principios de una paz lingüística planetaria justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social”*³⁸ cuyo función principal es, tal y como se manifiesta en el Preámbulo *“propiciar un marco de organización política de la diversidad lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio recíprocos”*³⁹.

3.1.2 Los artículos de la Declaración.

A raíz de estas anotaciones introductorias, debe procederse al examen del articulado del texto que compone la DUDL y analizar cuáles son los derechos lingüísticos y su alcance.

En base al artículo 1 DUDL una comunidad lingüística es *“toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se auto identifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio”*. No obstante, el artículo 2 DUDL hace referencia a las situaciones en las que coexisten en un mismo territorio diferentes

³⁷ *Ibid.*, p.23

³⁸ *Ibid.*, p. 9

³⁹ *Ibid.*, p.18

comunidades lingüísticas y aboga por que *“el ejercicio de los derechos formulados en esta Declaración se tiene que regir por el respeto entre todos y dentro de las máximas garantías democráticas”*. Por su parte, el tercer precepto de la DUDL articula un listado de derechos que se caracterizan por ser *“personales, inalienables y ejercibles”* para todas las personas y así estos se componen por los siguientes: *“derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística, derecho al uso de la lengua en privado y en público, derecho al uso del propio nombre, derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística, derecho a mantener y desarrollar la propia cultura, y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del 16 de diciembre de 1996”*. Ahora bien, todas estas garantías legales solo alcanzarán plena efectividad cuando se promulgue la integración de todas las comunidades lingüísticas que permita una pacífica convivencia entre ellas. Esa es la razón de ser del artículo 4 DUDL que dispone que *“la Declaración considera que las personas que se trasladan y establecen en el territorio de una comunidad lingüística diferente de la propia tienen un derecho y un deber de integración. Entendida la integración como una socialización adicional de estas personas, de manera que puedan conservar sus características culturales de origen, pero compartan con la sociedad que las acoge las referencias, los valores y los comportamientos suficientes para permitir un funcionamiento social global sin más dificultades que las de los miembros de la comunidad receptora”*. Además, el segundo apartado de dicho artículo hace referencia a la asimilación *“entendida como la aculturación de las personas en la sociedad que las acoge, de tal manera que substituyan sus características culturales de origen por las referencias, los valores y los comportamientos propios de la sociedad receptora”* que en todo caso *“no debe ser forzada o inducida sino el resultado de una opción plenamente libre”*. En este sentido, según Tove Skutnabb-Kangas *“la integración es la formación de una serie de características comunes en el grupo étnicamente heterogéneo. En cambio, la asimilación es la desaparición de características objetivamente distintivas, es la pérdida de los elementos específicos de la cultura material y no material, y subjetivamente, la pérdida del sentimiento de pertenecer a un grupo étnico particular”*⁴⁰.

⁴⁰ SKUTNABB-KANGAS, T., “Language Policy and Linguistic Human Rights” in RICENTO, T. (ed.) An

Respecto a los elementos característicos de los derechos de las comunidades lingüísticas, la DUDL los define en su artículo 5 como *“iguales e independientes de la consideración jurídica o política de las lenguas oficiales, regionales o minoritarias”*. Esto es, que la no oficialidad de la lengua no significa *per se* que sea inferior o haya obtenido menor protección, incluso la DUDL recalca en el mismo artículo sobre el reconocimiento de expresiones tales como lengua minoritaria o regional que *“es frecuente el uso de los determinativos para restringir los derechos de una comunidad lingüística”*. En todo caso, sea cual sea la consideración jurídica o política de la lengua, reconoce el artículo 9 DUDL que *“todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a codificar, preservar, estandarizar, desarrollar y promover su sistema lingüístico”* Más aún, la literalidad del artículo 10 DUDL expresa que *“todas las comunidades lingüísticas independientemente de su consideración son iguales en derecho, es inadmisibles la discriminación”* y con el objetivo de reflejar el principio de no discriminación del artículo 2 DUDH, se añade que se *“considera inadmisibles las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas”*. A su vez, para que el presente texto alcance a todas las comunidades lingüísticas, reconoce el artículo 11 DUDL que *“Toda comunidad lingüística tiene derecho a gozar de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de los derechos recogidos en esta declaración”*.

Los siguientes preceptos de la DUDL recogen los aspectos más prácticos del articulado, dotando de protección al uso de la lengua en las actuaciones de la vida cotidiana de las personas. Así, las personas tienen la facultad reconocida de desarrollar todas las actividades en la lengua que les es propia de manera que se encuentran en el texto los siguientes preceptos. Dispone el artículo 15 DUDL, en relación con la Administración pública y organismos oficiales que *“toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio”*, y el artículo 16 DUDL que *“todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales y locales”*. En relación al anterior precepto, establece el artículo 17 DUDL que *“las comunidades lingüísticas tienen derecho a obtener toda la documentación oficial en su lengua”*, además tal y como se desprende del artículo 18 DUDL de tener *“derecho a que las leyes y otras disposiciones jurídicas que le conciernen se publiquen en la lengua propia del territorio”*. Así, se les

otorga a las personas la potestad de poder acudir a cualquier área del ámbito de las Administraciones Públicas y hacer valer sus peticiones, reclamaciones o cualquiera de otras acciones en su propia lengua y esta será válida ya que se le otorga el valor de utilizarla como si de lengua oficial se tratase. Para ello, la Administración tiene que estar dotada para dar una respuesta adecuada.

Por otro lado, dentro del Título más práctico de la DUDL, la Sección II del Título segundo hace alusión a la educación, considerándola actividad necesaria para el desarrollo del conocimiento de cualquier lengua. En este sentido, el artículo 23 DUDL establece que *“la educación debe contribuir a fomentar la capacidad de autoexpresión lingüística y cultural de la comunidad lingüística del territorio donde es impartida”*. Ahora bien, esta potestad es conferida a la propia comunidad lingüística, que tal y como reconoce el artículo 24 DUDL *“tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado de presencia de su lengua, como lengua vehicular y como el objeto de estudio, en todos los niveles de la educación dentro de su territorio”*. Así, con el objetivo de fomentar la educación en esta materia, dispone el artículo 26 DUDL que *“toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a todos sus miembros adquirir el pleno dominio de su propia lengua, con las diversas capacidades relativas a todos los ámbitos de uso habituales, así como el mejor dominio posible de cualquier otra lengua que deseen conocer”* y para la máxima eficacia del presente bloque finaliza el artículo 29 determinando que *“toda persona tiene derecho a recibir la educación en la lengua propia del territorio donde reside”*.

A continuación, la Sección III del actual Título, regula lo relativo a la onomástica, a saber, el estudio y la catalogación de los nombres propios de una lengua. En este sentido, dispone el artículo 31 DUDL que *“toda comunidad tiene...derecho a hacer uso de los topónimos en la lengua del territorio en los usos orales y escritos, y en los ámbitos privados, públicos y oficiales”*. Así, según la RAE, un topónimo es el nombre propio de un lugar, y como ejemplo se puede hacer alusión a la ciudad de “Ocotlán” situada en Jalisco (México), que significa “lugar donde hay muchos pinos”. En relación con esto, recoge el artículo 32 DUDL que *“toda comunidad lingüística tiene derecho a autodesignarse en su lengua”*. En este caso, valdrían los ejemplos de Jon (euskera) en relación con Juan (español) o Miren (euskera) en relación con María (español).

La siguiente Sección recoge aspectos relacionados con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Comienza el artículo 35 DUDL estableciendo que *“toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado de presencia de su lengua en los medios de comunicación de su territorio”* y este precepto se refuerza y garantiza con el artículo 38 DUDL que dispone que *“todas las lenguas y las culturas de las comunidades lingüísticas deben recibir un trato equitativo y no discriminatorio en los contenidos de los medios de comunicación en todo el territorio”*.

De igual forma, en la sección relativa a la cultura, los artículos 41 a 43 DUDL recogen que *“toda comunidad tiene derecho a usar su lengua y a mantenerla y potenciarla en todas las expresiones culturales”* como el “derecho a desarrollarse plenamente en el propio ámbito cultural” y el “derecho a acceder a las obras producidas en su lengua”.

Para finalizar, la Sección VI, recoge disposiciones que afectan al ámbito socioeconómico. Entre ellos destaco los artículos 47 a 52 DUDL en los que se hace alusión a que *“toda comunidad lingüística tiene derecho a establecer el uso de su lengua en todas las actividades socioeconómicas de su territorio”*, *“todo el mundo tiene derecho a usar su lengua con plena validez jurídica en las transacciones económicas de todo tipo”* como *“a usar su lengua en cualquier tipo de organización socioeconómica: laborales, sindicales, patronales, profesionales y gremiales”*. Además, *“toda comunidad tiene derecho a una presencia predominante de su lengua en la publicidad, rotulación, la señalización exterior y en el conjunto de la imagen del país”*, *“a usar la lengua propia del territorio en sus relaciones con las empresas o establecimientos comerciales y a ser recíprocamente atendido y correspondido en esa lengua”* además de *“tener derecho a ejercer las actividades laborales o profesionales en la lengua del propio territorio”*.

En conclusión, la DUDL reconoce a las comunidades lingüísticas el derecho a usar su propia lengua en todos los ámbitos, y en consecuencia, tienen el derecho a comunicarse en su propia lengua, en el ámbito público o privado, el derecho de disponer información pública en su lengua y a realizar cualquier trámite de carácter público. También tienen el derecho de recibir educación básica en su lengua materna o como materia adicional, a acceder a la justicia contando con intérpretes y defensores que

conozcan su lengua, a que sus lenguas tengan presencia en los medios de comunicación y finalmente, el derecho a participar en el desarrollo de sus lenguas.

4. NORMATIVA OFICIAL DE LAS LENGUAS MINORITARIAS.

Los esfuerzos de los grupos no dominantes por preservar sus diferencias culturales, religiosas o étnicas se iniciaron con la creación de los Estados nación en los siglos XVIII y XIX. El reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías con arreglo al derecho internacional empezaron en la Sociedad de las Naciones con la adopción de varios tratados sobre las minorías⁴¹. Entre ellos destacamos el mayor reconocimiento en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se ha examinado con anterioridad. Sin embargo, otro de los instrumentos trascendentales es la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas⁴² que en su primer artículo dispone que *“Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos objetivos”*. En todo caso, para que los derechos de las minorías sean efectivos, es fundamental promover y proteger la identidad de esas minorías. La promoción y la protección de su identidad impiden la asimilación forzada de las minorías y la pérdida de culturas, religiones e idiomas que constituyen la base de la riqueza del mundo y que por consiguiente forman parte de su patrimonio⁴³.

Actualmente, la Unión Europea tiene registradas alrededor de 60 lenguas “regionales o minoritarias”, en las cuales aproximadamente 46 millones de europeos, esto es, aproximadamente el diez por ciento de la población europea las utilizan.

En este sentido, tal como establece el primer artículo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, estas se definen como aquellas lenguas *“habladas tradicionalmente en un territorio de un Estado por nacionales de ese Estado que*

⁴¹ NACIONES UNIDAS, Derechos Humanos, Alto Comisionado, “Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación”. Ginebra y Nueva York, 2010, p. 2

⁴² Asamblea General de las NU, “Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas”, Resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992.

⁴³ *Ibid.*, p.19

constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la población del Estado, y diferentes de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado; no incluye los dialectos de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado ni las lenguas de los inmigrantes⁴⁴”. Así, en la mayoría de países existe una lengua oficial común o lenguas cooficiales aunque son minoría los países en cuyo territorio se habla una única lengua. Esas lenguas no oficiales pero que son utilizadas responden al concepto de lenguas minoritarias, que en comparación con las oficiales requieren de mayor protección si se quiere evitar su extinción por no tener cabida en el sistema educativo o en otras áreas fundamentales. También son lenguas minoritarias algunas lenguas cooficiales, como es el caso del euskera, del catalán, o del gallego. Es fundamental que la propagación de una lengua no sólo se desarrolle en el ámbito privado, ya sea social o familiar, si no que tenga un lugar para su adecuado aprendizaje. La razón es sencilla, si una comunidad de hablantes no puede aprender ni su idioma ni su cultura es cuestión de tiempo que vaya desapareciendo pudiendo llegar a su extinción. Por ello, parece lógico que la normativa jurídica y su aplicación efectiva esté destinada a promover el principio de igualdad y lograr la satisfacción del derecho a la lengua, esto es, promocionando las lenguas minoritarias y normalizando su uso en todos los campos.

De esta manera, Gramstad (2011) plantea cuatro situaciones lingüísticas típicas que se dan en Europa para entenderse mejor el fenómeno de las lenguas minoritarias y su coexistencia con las lenguas oficiales. En primer lugar, existen lenguas que pueden caracterizarse por mayoritarias en un país y, en cambio, considerarse minoritaria en otro. Sirva de ejemplo el alemán, el ucraniano, el serbio, el danés o el húngaro. Por su parte, existen lenguas que siempre son minoritarias, bien sea en muchos países –como el sami, el romaní, el yidis o el frisón– o bien en un único país, como el galés y el gaélico escocés en el Reino Unido, el sorbiano alto y bajo en Alemania, o el meänkieli en Suecia. En tercer lugar, sucede que en algunos países conviven algunas lenguas minoritarias con muchos hablantes y otras del mismo carácter pero con pocos hablantes. Por ejemplo, en una zona de España se habla el catalán, con 5,6 millones de hablantes y el aranés, con 5.000 hablantes; en Finlandia podemos encontrar el sueco, con 290.000 hablantes y el Inari sami, con 250; en el Reino Unido, el galés tiene 750.000 hablantes y el córnico 400; y en Eslovaquia hay 520.000 hablantes de húngaro y 2.600 de polaco.

⁴⁴Consejo de Europa, “Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o regionales hecha en Estrasburgo el 15 de noviembre de 1992”, BOE núm. 222, de 15 de septiembre de 2001, p. 34724

Este tipo de pluralidad lingüística aparece en la mayoría de los Estados europeos. Finalmente, hay países donde se utilizan varias lenguas regionales o minoritarias y otros en cambio, donde estas son pocas. Así, en Dinamarca sólo hay una lengua minoritaria; en Chipre y Suiza hay dos; en Serbia y Ucrania hay 13 lenguas; y en lo que se refiere a los dos Estados que se han sumado más recientemente a la Carta, Rumanía tiene 20 lenguas regionales o minoritarias y Polonia tiene 15⁴⁵.

4.1 La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

En el año 1992 el Consejo de Europa aprobó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias al objeto de amparar y fomentar las lenguas minoritarias. Hasta la fecha un total de 31 países han firmado la Carta, de los cuales 23 también la han ratificado. España fue uno de los primeros firmantes en 1992 y ratificó la misma en 2001. En el caso de Francia, sin embargo, aunque firmó la Carta en 1999, nunca la ha ratificado. Al contrario de la DUDL, la Carta además de ser anterior a la declaración es una iniciativa de carácter oficial y actualmente, se enmarca en el catálogo general de derechos lingüísticos contemplados en la DUDL. Por su parte, tal y como refleja la Carta en el preámbulo *“los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios de la presente Carta, conscientes del hecho de que la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias en los distintos países y regiones de Europa representan una contribución importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural, en el ámbito de la soberanía nacional y de la integridad territorial”*. La Carta pretende ser la base sobre la que pueda organizarse la protección y el fomento de todas las lenguas regionales o minoritarias tradicionales de Europa, puesto que cada lengua forma parte de la diversidad lingüística de Europa y porque todas ellas contribuyen *“al mantenimiento y al desarrollo de las tradiciones y la riqueza culturales de Europa”*, por citar de nuevo el preámbulo.

Así, la Carta establece los principios básicos y objetivos en base a los cuales los Estados elaborarán políticas, legislación y la puesta en práctica de la protección que brindaran a las lenguas minoritarias. De esta manera, se considera un instrumento que proporciona el marco necesario para la preservación de las lenguas en cuestión. En este sentido, el artículo 7 de la Carta es trascendental, ya que es el precepto que configura los

⁴⁵ GRAMSTAD S., “La protección de las lenguas minoritarias en Europa: hacia una nueva década”, *El mecanismo de control de la Carta: una perspectiva práctica*, 2011, pp. 29-30.

principios mencionados y establece que *“en materia de las lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas y según la situación de cada una de ellas, las Partes basarán su política, su legislación y su práctica en los objetivos y principios siguientes: el reconocimiento de las lenguas regionales o minoritarias como una expresión de la riqueza cultural; el respeto al área geográfica de cada lengua regional o minoritaria; la necesidad de acción resolutive para promocionar tales lenguas; la facilitación y/o promoción del uso de tales lenguas, en el lenguaje y la escritura, en la vida privada y pública; la provisión de formas apropiadas y medios para la enseñanza y el estudio de dichas lenguas a todos los niveles apropiados; la promoción de intercambios transnacionales relevantes; la prohibición de toda forma de diferenciación, exclusión, restricción o preferencia injustificadas, relativas al uso de una lengua regional o minoritaria, con el objeto de no fomentar o hacer peligrar su mantenimiento o desarrollo; y por último, la promoción por parte de los estados del entendimiento mutuo entre todos los grupos lingüísticos del país”*.

Por su parte, a partir del artículo 8 y siguientes la Carta establece una serie de medidas concretas para promover el uso de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública. Estas medidas abarcan los siguientes campos: educación, justicia, las autoridades administrativas y servicios públicos, medios de comunicación, actividades e instalaciones culturales, las actividades económicas y sociales y los intercambios transfronterizos.

Finalmente, la Parte IV de la Carta diseña su propio sistema de aplicación basado en la evaluación de su funcionamiento y su aplicación en los estados para, en su caso, hacer recomendaciones para la mejora de su legislación, sus políticas y sus prácticas. El elemento central del mecanismo de vigilancia es un comité de expertos independientes. De esta manera, los estados firmantes deberán redactar un informe inicial que irá seguido de otro cada tres años. El Comité se encargará de examinarlos y en caso necesario, tratará las cuestiones menos concisas que se encuentren en ellas. Al mismo tiempo, el Secretario General del Consejo de Europa presenta un informe bienal detallado a la Asamblea Parlamentaria en la que se trata la aplicación de la Carta. Así las cosas, al redactar sus informes nacionales, los Estados parte ya se hacen más conscientes de la situación de las lenguas regionales o minoritarias que se hablan en sus territorios y de sus compromisos con la Carta. Como los informes son públicos, los

hablantes de lenguas regionales o minoritarias y otras partes interesadas también tienen una visión de la postura y las políticas del país⁴⁶.

Merece destacar que la simple ratificación de la Carta puede tener efectos sobre las lenguas regionales o minoritarias que se hablan en el Estado que la ratifica. Para algunas lenguas, el instrumento de la ratificación es el primer reconocimiento de su estatus de lengua en ese país. Este fue el caso, por ejemplo, del bajo alemán en Alemania, el gaélico escocés en el Reino Unido o el limburgués en los Países Bajos⁴⁷. Además, En palabras de Gramstad, *“es justo decir que la Carta ha contribuido significativamente a crear un clima de comprensión, tolerancia y respeto entre las autoridades y los hablantes de lenguas minoritarias. Este clima es necesario para que estos agentes trabajen juntos por el mismo objetivo, la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias como parte esencial y vital de la historia, la cultura y la identidad del país”*⁴⁸. En los últimos diez años, podemos concluir que la Carta y su sistema de control han tenido repercusión en su legislación y sus prácticas. Por supuesto, todas las partes implicadas pueden mejorar: los Estados, los hablantes y el Consejo de Europa⁴⁹.

4.2 Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El presente apartado pretende extender el análisis sobre las lenguas minoritarias en aras de ampliar la visión que se ha aportado de estas y brindarle un espacio al estudio de dichas lenguas de los pueblos indígenas. La idea introductoria recae en que los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. En todo caso, la definición de pueblo indígena ha sido objeto de una larga discusión, tanto en la doctrina como en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. En ese sentido, señala Falcón Gajardo que *“un pueblo indígena es considerado como una comunidad histórica, con estructura interna, que ocupa o ha ocupado un territorio, que comparte un idioma o lengua y tiene una cultura diferenciada (al resto de la sociedad que conforma el*

⁴⁶Consejo de Europa. “La protección de las lenguas minoritarias en Europa”, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria- Gasteiz, 2011, p.36

⁴⁷*Ibidem.*

⁴⁸GRAMSTAD S., “La protección de las lenguas minoritarias en Europa...”, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁹Consejo de Europa. “La protección de las lenguas minoritarias...”, *op. cit.*, p. 40

país)⁵⁰”. Es preciso señalar el artículo 1 del Convenio n°169 de la OIT⁵¹ ya que ofrece los parámetros para definir a estos pueblos de manera que se refiere a ellos como “*los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas*”. Adicionalmente se añade la auto identificación, es decir, la conciencia que tenga el sujeto o colectivo de su identidad indígena o tribal como criterio de clausula de cierre, que se debe utilizar para saber si estamos en presencia de un pueblo indígena⁵².

Actualmente existen por lo menos cinco mil pueblos indígenas que hablan aproximadamente unas cinco mil lenguas, integrados por 300 millones de personas que habitan en más de setenta países, que a su vez constituyen entre un 4 y 5% de la población mundial. Dado que se trata de pueblos frágiles, ubicados en países en vías de desarrollo y a los que se les ha otorgado mínimo reconocimiento, existe un particular riesgo de que los indígenas pierdan su forma de vida, su idioma y su cultura. En definitiva, la discriminación social, la marginación y la pobreza que padecen la mayoría de pueblos indígenas en el mundo, junto con el escaso número de hablantes, además de la imposibilidad en muchos casos de transmisión a las siguientes generaciones, hacen que las lenguas indígenas se encuentren en especial peligro de extinción⁵³. El derecho a la cultura propia, garantiza la permanencia de la diversidad cultural de las etnias existentes en los países, y es de vital importancia para el respeto de la dignidad de los indígenas. El reconocimiento del derecho a la propia cultura, y en consecuencia, el derecho a utilizar su propia lengua, en este caso no trata solo sobre un derecho más en el marco constitucional sino de un derecho esencial que les ha permitido su reproducción social⁵⁴.

⁵⁰ FALCON GAJARDO, J., “Pueblos indígenas”, *Revista en cultura de la legalidad*, n°9, 2015-2016, p. 233.

⁵¹ Organización Internacional del Trabajo (OIT), *Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*, 27 Junio 1989

⁵² SEGURA, B., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 234

⁵³ ROJAS QUIÑONEZ, CM., “La diversidad lingüística en Colombia: protección jurídica de las lenguas indígenas”, *Pensamiento jurídico*, n.º 22, 2008, p. 255

⁵⁴ NÚÑEZ RIVERO, C., “La diversidad cultural como derecho fundamental de los pueblos indígenas”, *Revista de derecho UNED*, n.º 17, 2015, p. 12

Por ello, es fundamental legislar tanto a nivel supranacional como nacional en la materia, en el primero de los casos para instar a los Estados a garantizar y promulgar un efectivo desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas y en el segundo de los casos para que los Estados asuman la responsabilidad de protección de estas, ya que su pérdida, como ya se ha señalado, no solo significaría un perjuicio del bienestar de estos pueblos, sino la pérdida de toda una cultura, pues la lengua es decisiva para el desarrollo y el mantenimiento de la identidad cultural⁵⁵. Yrigoyen Fajardo (2001) señala que *“el derecho de usar los idiomas indígenas supone la atribución de los pueblos indígenas y de las minorías lingüísticas, así como de sus miembros, de utilizar dichos idiomas, y que su uso reciba protección y promoción en el marco de su propia identidad cultural. De su parte, el Estado está obligado a respetar, proteger y promover el uso y desarrollo de los idiomas indígenas, así como la identidad cultural de dichos pueblos y sus miembros”*⁵⁶.

En primer lugar, es preciso destacar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas⁵⁷, en cuyo artículo 13 dispone que *“los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, judiciales y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”* y añade en el artículo 16 que *“los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna”*. Por tanto, siguiendo con la distinción de May (2009)⁵⁸ basada en la distinción de Heinz Kloss (1977)⁵⁹, se observa que a diferencia de lo que ocurre con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en la que los derechos lingüísticos reconocidos están orientados tanto a la

⁵⁵ ROJAS QUIÑONEZ, CM., “La diversidad lingüística...”, *op cit*, p. 258

⁵⁶ YRIGOYEN FAJARDO, R., “Justicia y Multilingüismo. Pautas para alcanzar una Justicia Multilingüe en Guatemala”, *Programa de Justicia Checchi/AID*, 2001, p. 77

⁵⁷ Asamblea General de las Naciones Unidas. “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, Resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007.

⁵⁸ MAY, S., “Derechos lingüísticos”, *op. cit*, pp. 132-134.

⁵⁹ KLOSS, H., “The American Bilingual Tradition”, Rowley: Newbury House, 1977

tolerancia como a la promoción, la Declaración sobre los Derechos de los pueblos Indígenas, reconoce los derechos lingüísticos pero orientados a la tolerancia. Dicho esto, existen indicativos internacionales sobre la necesidad de habilitar cauces para que las lenguas indígenas tengan cabida en los sistemas estatales y que su uso sea normalizado. Para ello se requiere de voluntad política que lleva aparejada necesariamente la asignación de fondos y recursos dirigidos a la protección y el fomento de las lenguas indígenas y además concretar políticas lingüísticas que permitan a las diferentes comunidades que conviven en el territorio de cada Estado hacer uso de su idioma materno de la manera más amplia y frecuente posible⁶⁰.

Ahora bien, como ya se ha recalcado, son los Estados los que tienen que proporcionar la protección que exige la comunidad internacional y aunque es cierto que en muchos casos esta no llega a ser suficiente ni efectiva, y en consecuencia no se elimina el riesgo de desaparición de las lenguas de los pueblos indígenas, existen en la actualidad ejemplos de Estados que han legislado en la materia. El mayor reconocimiento se encuentra en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 que se constituye como un ejemplo del plurilingüismo el cual aborda de forma pormenorizada la cuestión lingüística y le dedica un total de 14 artículos en los que trata temas diversos: el estatus de las lenguas; el papel del Estado con respecto al plurilingüismo; la no discriminación por motivos de lengua; el reconocimiento, promoción y valoración de las lenguas indígenas; la educación plurilingüe; la presencia de las lenguas indígenas en los medios de comunicación y en el ámbito judicial⁶¹. También requiere mención la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México⁶² cuyo artículo 7 recoge que *“las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública”* y el artículo 9 que *“es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras”*.

⁶⁰ ROJAS QUIÑONEZ, CM., “La diversidad lingüística..., *op cit*, p. 264

⁶¹ CORRAL PÉREZ, I., “Lenguas indígenas, identidad y marco legal en Hispanoamérica: Una aproximación ecolingüística”, *E-aesla*, n.º 2, 2006, p. 192

⁶² Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.

No obstante, ¿De qué manera el Estado cumple la disposición de promover el uso y desarrollo de las lenguas indígenas cuando estas no figuran en el planteamiento académico del sistema educativo? ¿Cómo se cumple en la práctica que las lenguas indígenas tengan la misma validez en todo el territorio nacional si solo las entienden en contextos geográficos o étnicos limitados? ¿Qué pasa con el hablante de una lengua indígena que quiere llevar a cabo un trámite y a quien no obstante ningún funcionario puede atender en una oficina pública porque no habla su lengua? ¿Qué ocurre con los indígenas marginados de la información porque en los medios de comunicación a nivel nacional no hay transmisiones en lenguas indígenas?⁶³ La respuesta es sencilla aunque desesperanzadora y nada positiva. Debe tenerse en cuenta que muchos de los pueblos indígenas se encuentran en países en vías de desarrollo en los cuales hay una gran falta de recursos. Así, la tarea de garantizar la protección y el fomento del patrimonio lingüístico de forma teórica es un avance elemental pero no suficiente si no se cuenta con la infraestructura necesaria. No basta con establecer que las lenguas indígenas son lenguas nacionales al mismo nivel que la lengua oficial del país, ni con decir que las lenguas indígenas serán válidas para cualquier asunto o trámite de carácter público si en la realidad se ve que no es posible llevarlo a la práctica⁶⁴

5. DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL.

Una vez analizados los derechos lingüísticos desde un prisma internacional, resaltando los referentes oficiales y no oficiales, el presente apartado centrará el análisis en la protección que otorga el ordenamiento español a los derechos lingüísticos, prestando especial atención a las principales lenguas minoritarias, o en un sentido más positivo, lenguas regionales existentes dentro del Estado Español.

La lingüística románica y sus diferentes disciplinas, como historia de la lengua, dialectología, toponimia, sociolingüística histórica, han mostrado que las zonas lingüísticas del catalán, vasco, aranés, aragonés, asturiano y gallego, en la Alta Edad Media eran más extensas que en la actualidad. A partir de entonces, estas lenguas fueron arrinconadas territorialmente por el castellano, sufriendo mayor peligro que el existente hasta entonces. Hasta los comienzos del siglo XX no se produjo un cambio significativo

⁶³GIOVINE YÁÑEZ, M.A, "La diversidad etnolingüística en México en el marco de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas", *El español, lengua de traducción para la cooperación y el diálogo*, 2008, p. 424

⁶⁴ *Ibid.*, p. 427

en la actitud hacia la lengua propia. A partir de esta época, aun bajo la represión del franquismo, muchos hablantes de lenguas minoritarias se han ido convencido de que su forma de hablar autóctona es un elemento esencial de su identidad cultural que debe ser conservado para las generaciones venideras⁶⁵.

En efecto, hoy es posible afirmar que los derechos lingüísticos están recogidos en numerosa normativa que permite garantizar el uso, el fomento y el desarrollo de las lenguas regionales en España. Para ello, es fundamental comenzar el análisis desde el texto constitucional y tras ello, acudir a los Estatutos de Autonomía y a las Leyes de Normalización de cada Comunidad Autónoma.

5.1 Protección constitucional.

El Preámbulo de la Constitución española de 1978 (en adelante CE)⁶⁶ proclama la voluntad de proteger a *“todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”* lo que permite obtener una primera constatación: el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España no solamente en cuanto factor cultural, sino también en cuanto elemento estructural de la convivencia en las entidades territoriales en las que se produce⁶⁷. Tal reconocimiento se concreta en el artículo 3 CE, que convierte a España, oficialmente, en un Estado con pluralismo lingüístico al disponer que *“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”*. El estudio del precepto debe realizarse atendiendo a tres conceptos diferentes. En el primer apartado se determina que el castellano es la lengua del Estado, y en consecuencia, su radio de acción se extiende al conjunto del territorio nacional y a todos sus hablantes. Con la expresión “las demás lenguas españolas” del segundo apartado, se determina que existen lenguas con carácter

⁶⁵ WINKELMANN, O., “Sobre la estandarización de las lenguas minoritarias de España”, *Lletres asturianas: Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Asturiana*, n.º 53, 1994, pp. 9

⁶⁶ Constitución Española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978).

⁶⁷ PÉREZ FERNÁNDEZ, JM., “La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias y su encaje en el modelo constitucional español: ¿Un tertium genus en el reconocimiento de los derechos lingüísticos?”, *Revista Española de Derecho constitucional*, núm. 89, mayo-agosto (2010), p. 169

cooficial en sus respectivas regiones autónomas junto al castellano. En todo caso, sus derechos están recogidos en los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma y son, a saber, el catalán, el gallego y el euskera. Finalmente, la denominación “las distintas modalidades lingüísticas” utilizada en el tercer apartado se refiere a aquellas lenguas minoritarias, que sin ser reconocidas como lenguas oficiales, son objeto de protección constitucional⁶⁸.

En este sentido, la expresión “de acuerdo con sus estatutos” exige que sea el Estatuto de Autonomía, y no ninguna otra norma estatal o autonómica, el que prevea una declaración expresa de oficialidad (junto al castellano). Así, cumplida la garantía de la previsión estatutaria, las comunidades autónomas gozan de margen para diseñar el régimen jurídico lingüístico (que se analizará en los siguientes apartados referidos a cada comunidad autónoma). En caso de que no exista tal declaración, el pluralismo lingüístico reconocido por la CE se traduce en una tutela a la protección y a la promoción en los distintos ámbitos, aunque no establece una especial protección ya que de ser así debería incluir cuales son las medidas para garantizar dicha protección. En definitiva, existe la posibilidad de reconocer a una lengua su validez a todos los efectos jurídicos en base al apartado 2 del artículo 3 CE o, en cambio, reconocer una lengua regional de forma más limitada y parcial que sirva de instrumento de comunicación tanto en instancias públicas como privadas⁶⁹.

5.2 Normativa autonómica.

La CE fundamenta los Estatutos de Autonomía y en ellos están legalmente basadas las respectivas Leyes de Normalización Lingüísticas con sus reglamentos correspondientes. En efecto, en nuestro estado de derecho la política de protección de las distintas modalidades lingüísticas se articula sobre las llamadas “Leyes de Normalización Lingüística” que han dictado las CCAA del País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Islas Baleares, así como la Ley Orgánica de Mejora del Régimen Foral de Navarra⁷⁰. A través de estas normas, las Comunidades Autónomas fomentan sus propias lenguas y encaminan el uso de estas a su efectivo desarrollo y aplicación.

⁶⁸ WINKELMANN, O., “Sobre la estandarización...”, *op. cit.*, p. 16

⁶⁹ PÉREZ FERNÁNDEZ, JM., “La tutela de las lenguas regionales...”, *op. cit.*, p. 172

⁷⁰ SEGURA, B., “Derechos lingüísticos”, *El Notario ...*, *op. cit.*, p. 61.

En lo relativo a esta cuestión, todos los estatutos reflejan cierta convergencia en dos puntos esenciales: por un lado, la definición de la lengua autonómica en todos los estatutos y, además, lengua oficial al mismo tiempo que el castellano; y por otro, los derechos de todo ciudadano a utilizar la lengua propia y a no ser discriminado en función de la lengua utilizada⁷¹.

Por su parte, las Leyes de Normalización, definen cuál es el papel que debe jugar la lengua autonómica en todos los sectores, incluido el sistema educativo. Concretamente, es la posterior regulación la que ha traído las diferencias existentes. En la mayoría de estas leyes el objetivo es hacer de la lengua vernácula la lengua vehicular⁷² de la enseñanza no universitaria y fomentar el uso de la lengua autonómica en la enseñanza universitaria. En estas leyes se considera, generalmente, que, aunque se puedan utilizar indistintamente las dos lenguas oficiales, los miembros de la comunidad universitaria deben conocer la lengua autonómica. Otro sector en el que la normalización ha realizado grandes progresos, en todas las Comunidades, es el de la Administración e instituciones autonómicas, pudiendo señalar que todos los gobiernos autónomos utilizan la lengua autonómica en los órganos e instituciones de la Comunidad, así como en los actos públicos oficiales. Evidentemente, existen diferencias importantes entre unas Comunidades y otras, como podemos observar en el funcionamiento de los parlamentos respectivos. En el Parlamento de Cataluña, por ejemplo se ha pasado a utilizar casi exclusivamente el catalán mientras que en el Parlamento Vasco –aunque el uso del euskera se haya ido incrementando– y en el de Navarra se utiliza generalmente el castellano. Por otra parte, si la presencia de las lenguas autonómicas se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, uno de los sectores en el que es más perceptible es el de los medios de comunicación social y, entre ellos, cabe destacar la televisión y la prensa. En este sentido, la mayoría de las Comunidades Autónomas disponen de canales propios y de periódicos en la lengua autonómica⁷³.

Con todo, los próximos subapartados tratarán sobre la normativa existente en cada Comunidad Autónoma, comenzando con el análisis de sus respectivos Estatutos de

⁷¹ HERRERAS, JC., “Políticas de normalización lingüística en la España democrática”, *actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, París, vol. 2, 2010, p. 5

⁷² Lengua vehicular es aquella usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros.

⁷³ HERRERAS, JC., “Políticas de normalización lingüística... *op. cit.*, pp. 6-11

Autonomía y dando lugar al estudio de las Leyes de Normalización. De esta forma, se distinguirán los derechos lingüísticos reconocidos sobre cada lengua minoritaria y se destacaran las similitudes y diferencias que se han encontrado entre ellas.

5.2.1 Comunidad Autónoma Vasca.

En palabras de Etxebarria Arostegi (2001), *“el euskera, al igual que cualquier otra lengua natural, constituye el objeto cultural más desarrollado del grupo humano que la ha usado y conservado. Minoritaria en tanto en cuanto es utilizada por un pequeño número de hablantes que, en gran medida, son hablantes de otra lengua mayoritaria (el español y, en menor proporción, el francés). Minorizada, en tanto en cuanto, en diferentes circunstancias históricas, antiguas y recientes, el uso del euskera estuvo postergado y, en algunas ocasiones, prohibido, a funciones de poco prestigio sociocultural, y aún lo está en parte”*⁷⁴.

El artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco⁷⁵ (en adelante EAPV) establece que *“el Euskera, lengua propia de la CAV, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial y todos los habitantes tendrán el derecho a conocer y a usar ambas lenguas”*. Así, el texto se limita a recoger la oficialidad del uso de ambas lenguas y dispone que *“nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”*. Se señala, además, el conocimiento de la lengua minoritaria como mérito de acceso a la Administración pública: *“Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”*.

Pocos años después, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Normalización del uso del euskera⁷⁶ en cuyo preámbulo se expresa que *“la Constitución y el Estatuto de Autonomía confían en los poderes públicos de la Comunidad Autónoma Vasca la adopción de las medidas encaminadas a asegurar el desarrollo y la normalización del*

⁷⁴ ETXEBARRIA AROSTEGI, M., “Normalización del euskera y educación bilingüe”, *Estudios de Lingüística*, Universidad de Alicante nº 15, 2001, p. 6

⁷⁵ Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, «BOE» núm. 306, de 22 de diciembre de 1979

⁷⁶ Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera (BOE num. 160 de 16 de diciembre de 1982)

euskera, considerando su doble dimensión de parte fundamental del patrimonio cultural del pueblo vasco, junto con el castellano, e idioma de uso oficial en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca” y se añade que “se trata de reconocer al euskera como el signo más visible y objetivo de identidad de la Comunidad Vasca y, además, como instrumento de integración plena del individuo, a través de su conocimiento y de su uso. El carácter del euskera como lengua propia del pueblo vasco y como lengua oficial junto con el castellano no debe comportar, en ningún caso, menoscabo de los derechos de aquellos ciudadanos que por diversos motivos no pueden hacer uso de ella, conforme a lo establecido expresamente en el apartado 3 del artículo 6 del EAPV”. A partir de los principios generales que informan la Ley, el Título Preliminar reconoce “el euskera como lengua propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el euskera y el castellano como lenguas oficiales en su ámbito territorial”. En el mismo título se proscribe la discriminación por razón de lengua. Finalmente, el artículo 5.2 de la Ley recoge los derechos lingüísticos que se les reconoce a los ciudadanos del País Vasco y son: “derecho a relacionarse en euskera, o en castellano, oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma, derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales, derecho a recibir en euskera publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de otros medios de comunicación”.

Sobre el uso del euskera en las Administraciones Públicas, la Ley de Normalización del uso del euskera aborda la cuestión entre los artículos 6 a 14 reconociendo “a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua que elijan”. En este sentido, es trascendental recalcar el Decreto 86/1997 por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca⁷⁷. Así como dispone el artículo 1.2 del Decreto, “con objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en euskera con las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, los poderes públicos adoptarán las medidas oportunas para la normalización del uso del euskera, ya como lengua de servicio ya como lengua de trabajo, en los diferentes

⁷⁷ DECRETO 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV n.º 72, de 7 de abril de 1997).

ámbitos de su competencia”. Para ello, las administraciones públicas vascas “*procurarán la adecuada capacitación lingüística del personal a su servicio*”. Por su parte, el artículo 4 del Decreto establece que el proceso de normalización lingüística en las Administraciones Públicas Vascas “*se llevará a cabo a través de la aprobación y ejecución de los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad*”. En este sentido, se han aprobado e implementado 6 Planes de Normalización del Uso del Euskera, el último, el VI Plan aprobado en 2018⁷⁸. Además, en el artículo 6 de dicho Decreto se establece que “*la Viceconsejería de Política Lingüística elevará informe de evaluación intermedia al Consejo del Gobierno Vasco*” para dar a conocer la situación de la normalización lingüística en las administraciones públicas⁷⁹. También en interés de estas páginas se debe tener en cuenta el Decreto 67/2003 de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud⁸⁰ “*fin es la progresiva incorporación del euskera tanto a las relaciones orales y escritas que con carácter habitual Osakidetza-Servicio vasco de salud mantiene con la población en la prestación de servicios sanitarios como a la totalidad de los procesos que como ente público conforman su actividad*”.

Respecto a las actuaciones de la administración pública, serán los Tribunales quienes determinen en cada caso concreto si se comete una discriminación tanto por parte del euskera como por parte del castellano. Cabe mencionar un ejemplo muy actual, La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha determinado en una sentencia que el Ayuntamiento de Irún actuó de forma discriminatoria en el proceso para cubrir doce plazas de agente de la Policía Local. Según el TSJPV esta actuación vulneraría el artículo 23 de la Constitución Española, que establece que los ciudadanos “*tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.*” En concreto, el auto señala que “*constituye un requisito discriminatorio que afecta al derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en la medida en que se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros*

⁷⁸ VI Plan de Normalización: https://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServletR01HNoPortal=true&N_LIBR=052121&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

⁷⁹ Sobre los planes de normalización: <https://www.euskadi.eus/normalizacion-linguistica-en-las-administraciones-publicas/web01-a2euadmi/es/>

⁸⁰ DECRETO 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (BOPV n.º 65, de 31 de marzo de 2003).

por el mero hecho de que aquellos conozcan la lengua cooficial, pese a que ello no sea necesario para garantizar el derecho de los administrados a relacionarse con la administración en euskera”.⁸¹

Por su parte, la Ley de Normalización del uso del Euskera dedica al ámbito de la enseñanza los artículos 15 a 20 en los cuales se reconoce, entre otros, “*el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos*”. Con vistas a materializar las prescripciones de carácter general recogidas en los citados preceptos y a fin de regular el uso de las dos lenguas oficiales en los niveles educativos no universitarios, el Gobierno Vasco y el Departamento de Educación ha publicado el Decreto 138/1983⁸² en cuyo artículo 3 se recoge que “*el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria se hará tomando como referencia los modelos de enseñanza bilingüe A, B y D descritos en los Anexos I y II del presente Decreto*”. En síntesis el Decreto perfila un marco de enseñanza bilingüe asentado en los modelos A, B y D en atención a los objetivos específicos de cada modelo, el nivel de competencia idiomática en ambas lenguas que cada uno de ellos pretende transmitir y el nivel de uso de euskera y castellano que intenta promover. En primer lugar, en el modelo A la enseñanza se imparte básicamente en castellano y el euskera se imparte como asignatura. En segundo lugar, en el modelo B la enseñanza se imparte tanto en castellano como en euskera, es decir, ambos idiomas son simultáneamente lenguas curriculares y vehiculares. Finalmente, el modelo D está diseñado para impartir la enseñanza básicamente en euskera, y el castellano se imparte como asignatura. En todo caso, tal y como recoge el artículo 16 de la Ley de Normalización del uso del euskera “... *el gobierno regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación sociolingüística de la zona*”. Antes de dar comienzo a la siguiente sección caben destacar los planes del uso del euskera en el ámbito universitario que indican que en este caso, se basan en el Decreto por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas 86/1997 e indican que “*se desarrollará*

⁸¹ El Diario Vasco. <https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/tsjpv-discriminatorio-requisito-euskera-policia-local-20210513233843-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fgipuzkoa%2Ftsjpv-discriminatorio-requisito-euskera-policia-local-20210513233843-nt.html>

⁸² Decreto 138/1983, de 11 de Julio, del Departamento de Educación y Cultura, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco (BOPV n.º 108, de 19 de julio de 1983).

una oferta de formación continua en euskera que responda a las necesidades del entorno”⁸³.

El siguiente ámbito de estudio corresponde al ámbito de la comunicación social que reconoce a partir del artículo 22 de la Ley de Normalización del uso del euskera “*a todos los ciudadanos el derecho a ser informados por los medios de comunicación social tanto en euskera como en castellano*” y “*a tal efecto, el Gobierno adoptará las medidas conducentes a aumentar la presencia del euskera en los medios de comunicación social, tendiendo a la equiparación progresiva en el uso de ambas lenguas oficiales*”.

Finalmente, el artículo 26 de la Ley de Normalización alberga los ámbitos restantes a los que los preceptos no han dado cabida de forma exhaustiva y en este sentido dispone que “*los poderes públicos vascos tomarán las medidas oportunas y los medios necesarios tendentes a fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social, a fin de posibilitar a los ciudadanos el desenvolvimiento en dicha lengua en las diversas actividades mercantiles, culturales, asociativas, deportivas, religiosas y cualesquiera otra*”. Dentro de estos ámbitos conviene destacar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico cuyos esfuerzos se han materializado en el Decreto 123/2008, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias⁸⁴ y el Plan de promoción del euskera en el ámbito socioeconómico del Gobierno Vasco⁸⁵.

En definitiva, ha quedado contrastado cómo la promulgación del Estatuto de Autonomía y la posterior Ley de Normalización del uso del euskera han brindado al euskera la regulación necesaria para que esta tenga carácter oficial dentro del territorio de la CAV y se pueda fomentar acorde a las medidas previstas en ellas. Se puede apreciar que la estandarización de la lengua vasca puede alcanzar su mayor objetivo: obtener el máximo reconocimiento, uso y fomento del euskera que pueda desarrollarse bajo la protección de la normativa existente y que con esfuerzo en planificar líneas estratégicas e inversión de fondos se pueda ampliar su radio de acción conservando su plena vitalidad.

⁸³ Sobre los Planes del uso del euskera en la universidad: <https://www.ehu.eus/es/web/euskara/euskara-ehun>

⁸⁴ Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias (BOPV n.º 135 de 16 de Julio de 2008).

⁸⁵ https://bideoak2.euskadi.eus/2019/12/26/news_59427/_PLAN_EUSKERA__2020-2023__CAST_.pdf

5.2.2 Comunidad Foral de Navarra.

Los primeros pasos en firme llevados a cabo dentro del territorio foral parecían indicar que el proceso estatutario sobre el euskara en Navarra discurriría conforme a los derroteros seguidos por el resto de autonomías con lengua propia. Sin embargo, la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra⁸⁶, que constituye a Navarra como una Comunidad Foral, aparte de no hacer referencia al euskara como lengua propia de Navarra por contraposición a los otros estatutos de autonomía como en el caso del EAPV, se caracteriza fundamentalmente por introducir una peculiar idea de oficialidad lingüística limitada a una sola parte del territorio, denominada como la oficialidad territorial parcial⁸⁷. La redacción del artículo 9 de la LORAFNA establece que *“1. El castellano es la lengua oficial de Navarra. 2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua”*. En desarrollo de tal disposición, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral del euskera⁸⁸ siendo la última de las comunidades autónomas bilingües del estado español en aprobar una ley de normalización lingüística. Ahora bien, esta ley no es propiamente una ley de normalización, como hemos visto en el caso del País Vasco, ya que, se trata más bien de una ley para proteger e impulsar el euskera⁸⁹. La característica principal de esta ley, además de no haber obtenido consenso en su aprobación y que requiere de un amplio desarrollo normativo que a continuación se analizará, es la división del territorio en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. Toda la normativa posterior para regular el uso en los diferentes ámbitos oficiales, que en síntesis son la administración y la enseñanza, se basa en esa división territorial⁹⁰, cuya razón de ser se debe a la declaración ya mencionada sobre la oficialidad territorial parcial del euskera en Navarra. Así, y como no ocurre en la CAV los derechos lingüísticos reconocidos en

⁸⁶ Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra (BOE n.º 195, de 16 de agosto de 1982, páginas 22054 a 22060).

⁸⁷ RODRIGUEZ OCHOA, JM., “Aplicación y desarrollo normativo de la Ley Foral del Vasqueño en el ámbito de la Administración Foral de Navarra”, *Revista internacional estudios vascos*, n.º 46, 2001, pp. 547-548.

⁸⁸ Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre del Euskera (BON n.º 154 de 17 de diciembre de 1986).

⁸⁹ VILCHES PLAZA, C., “Evolución de las actitudes ante el euskera de los universitarios de Navarra. 1992-2002”, Tesis Doctoral Universidad Pública de Navarra, Pamplona – Iruña, 2002, p. 45

⁹⁰ *Ibid.*, p. 46

Navarra varían según la zona en cuestión y por tanto, el análisis debe realizarse realizando esta división.

En primer lugar, en la zona vascófona, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en el ámbito educativo, las disposiciones respectivas son consecuencia lógica de que el castellano y el euskara gozan del mismo grado de oficialidad en la zona. Así, los artículos 10 y 14 de la Ley Foral del Euskera disponen que *“todos los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las Administraciones Públicas y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan”* y *“todos los alumnos recibirán la enseñanza en la lengua oficial que elija la persona que tenga atribuida la patria potestad o tutela o, en su caso, el propio alumno”*. Para el primero de los ámbitos, establece el artículo 8 del Decreto Foral 29/2003⁹¹ que en la zona vascófona *“serán válidas y tendrán plena eficacia jurídica todas las actuaciones administrativas cualquiera que sea la lengua oficial empleada”*. Para el segundo de los ámbitos, el Decreto Foral 159/1988⁹² reconoce, con similar redacción al sistema de la CAV, los modelos A, B y D. Por tanto, es preciso señalar que en la zona vascófona de Navarra se reconocen los mismos derechos lingüísticos que en la CAV.

En segundo lugar, en la zona mixta es donde se centra mayor complejidad del análisis. En efecto, en ella se halla Pamplona, capital foral y sede de los servicios centrales de la Administración Autonómica a los que necesariamente debe acudir la totalidad de los ciudadanos navarros. Por ese motivo, la cuestión sobre el uso del euskera en la administración alcanza la mayor relevancia al tratarse de esta zona⁹³. Se debe señalar el artículo 17 de la Ley Foral del Euskera que dispone que *“todos los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el euskera como el castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra. Para garantizar el ejercicio de este derecho, dichas Administraciones podrán: a) Especificar en la oferta pública de empleo de cada año, las plazas para acceder a las cuales sea preceptivo el conocimiento del euskera. b) Valorar como mérito el conocimiento del euskera en las convocatorias para el acceso a las demás plazas”*. Así, se destaca que al igual que en la zona vascófona y en la CAV, se reconoce el derecho a acudir a la Administración Pública y elegir utilizar el euskera o el

⁹¹ Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra (BON n.º 19 de 12 de febrero de 2003).

⁹² Decreto foral 159/1988, de 19 de mayo, por el que se regula la incorporación y uso del vascuence en la enseñanza no universitaria de Navarra (BON n.º 67 de 1 de junio de 1988).

⁹³ RODRIGUEZ OCHOA, JM., “Aplicación y desarrollo...”, *op. cit.*, p. 554.

castellano. Sin embargo, la elección del lenguaje en la respuesta de la Administración Pública es potestativa. En todo caso, aunque no sea por obligación estricta, sino sólo de manera potestativa (podrán), no cabe duda que una administración responsable tratará de garantizar el ejercicio de un derecho cívico mediante actuaciones apropiadas y conducentes a ello, como son disponer de funcionarios bilingües en determinados puestos de atención al público y valorar el conocimiento de una lengua propia en el resto de las plazas⁹⁴. Por su parte, el artículo 25 de la Ley Foral del Euskera establece que *“la incorporación del euskera a la enseñanza, se llevará a cabo de forma gradual, progresiva y suficiente, mediante la creación, en los centros, de líneas donde se imparta enseñanza en euskera para los que lo soliciten”* y a través del desarrollo normativo a través del Decreto Foral 159/1988⁹⁵, se establecen los modelos lingüísticos A, B y D, como en el caso de la zona vascófona y la CAV. Sin embargo, en esta zona se permite un nuevo modelo denominado G, que supone la totalidad de la enseñanza en castellano. En síntesis, en la zona mixta de Navarra no se aprecia reducción en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos respecto a lo anteriormente analizado, solo que aun reconociéndolos se regula la cuestión en consideración de que el número de hablantes vascos es menor en la zona y por ello su uso no está tan garantizado.

Finalmente, en la zona no vascófona aunque se reconoce la posibilidad de acudir a la Administración Pública en Euskera y se garantizan modelos de enseñanza que posibilitan el estudio del euskera, los preceptos que se analizan a continuación demuestran que al euskera no se le garantiza especial protección. En el ámbito de la Administración Pública, el derecho se reduce a poder dirigirse en euskera a estas; si bien, como añade el artículo 18 de la Ley Foral del Euskera, *“éstas podrán requerir a los interesados la traducción al castellano o utilizar los servicios de traducción previstos en el artículo 9”*. Por su parte, en el ámbito de la enseñanza, sólo se hace mención al euskera como asignatura, y siendo esta siempre potestativa. De esta manera, se elimina el modelo B y D y solo se puede optar por el modelo A y G. Así se hace constar en el artículo 14 de la Ley Foral del Euskera que dispone que *“La incorporación del euskera a la enseñanza como asignatura en los centros públicos y privados se realizará... cuando existan peticiones de los padres o tutores, o en su caso de los alumnos, que garanticen un número mínimo de alumnos que permita formar un*

⁹⁴ *Ibid.*, p. 557

⁹⁵ Decreto Foral 159/1988 de 19 de mayo, que regula la incorporación del vascuence en la enseñanza no universitaria (BON n.º 67 de 1 de junio de 1988).

grupo o unidad escolar”. Por tanto, es el diseño de la zona no vascófona la que justifica la “oficialidad parcial” del euskera en Navarra, y aunque se garantice, de forma mínima el uso del euskera en estos dos ámbitos, no se puede afirmar que existe el pleno reconocimiento del euskera y en consecuencia, derechos lingüísticos absolutos respecto a esta lengua.

5.2.3 Comunidad Autónoma de Cataluña.

La valoración de la lengua catalana como un baluarte identitario de Cataluña, y la vinculación de la cuestión lingüística a nociones de identidad nacional, justificará que, históricamente, los proyectos políticos y jurídicos del reconocimiento de un estatuto de oficialidad del catalán, se hayan circunscrito dentro de proyectos más amplios de reivindicación de un marco de autonomía para Cataluña⁹⁶. Como explica Pla Boix (2006) *“este es un Estatuto de autonomía que, en el tema idiomático, se caracteriza por dos notas básicas: de entrada, porque tiende hacia el establecimiento de un modelo de bilingüismo oficial asimétrico, a favor del catalán como lengua propia del país; en segundo lugar, se caracteriza por su vocación de completitud en la medida que recoge un amplio catálogo de prerrogativas lingüísticas que pretenden dotar de contenido el régimen de doble oficialidad en Cataluña*⁹⁷”.

Así, el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña⁹⁸ (en adelante EAC) destaca, entre otros, que *“la tradición cívica y asociativa de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de la lengua y la cultura catalanas”* y por ello, el artículo 6 EAC dispone que *“1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. 2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas”*. Probablemente, el

⁹⁶ PLA BOIX, AM., “L’ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 a 1936: el procés de reconeixement de l’estatut d’oficialitat del català”, *Revista de Llengua i Dret*, núm. 43, 2005, pp. 179-211.

⁹⁷ PLA BOIX, AM., “La llengua al nou estatut d’autonomia de catalunya”, *Revista d’estudis autonòmics i federals*, n.º 3, 2006, p. 264

⁹⁸ Ley Orgánica 6/2006, de 10 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE n.º 172 de 20 de julio de 2006).

reconocimiento que se le hace al catalán en la EAC es el mayor que se realiza en comparación a las demás CCAA ya que además de otorgarle carácter oficial se califica con los adjetivos de “normal” y “preferente”. Otro elemento novedoso es la referencia al “deber de conocer” el catalán. Sin embargo, como aclara Pla Boix (2006) *“con la Incorporación del deber de conocer el catalán en el nuevo Estatuto se avanza en la línea de garantizar una mayor paridad de estatus entre catalán y castellano. No se trata de un deber jurídico en sentido estricto, sino que se configura como una presunción. Responde a una voluntad política de garantizar una simetría con relación al deber de conocer el castellano del artículo 3.1 de la Constitución”*⁹⁹. Además, se contemplan múltiples referencias a lo largo del articulado que aluden a la lengua, como por ejemplo, el artículo 12 EAC al disponer que *“la Generalitat debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña”* o el artículo 50 EAC que establece que *“Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento”*.

Sin embargo, la especialidad que debe destacarse del EAC es que otorga un capítulo entero a los derechos y deberes lingüísticos entre los artículos 32 a 36 en los que cada precepto hace referencia a un ámbito en concreto. El hecho de que los derechos lingüísticos se encuentren garantizados expresamente en el EAC permitirá dotar a estos derechos de unas garantías de estabilidad y tutela que hasta ahora no tenían como en la Ley 1/1998 de 7 de enero de política lingüística.

Hay que tener en cuenta que el Estatuto es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, rango normativo de Ley Orgánica estatal, forma parte del bloque de la constitucionalidad y está sometida a unos procedimientos agravados de aprobación y reforma, lo que concede a sus previsiones unas garantías que no da la legislación ordinaria y que no se ha detectado en las anteriores CCAA analizadas¹⁰⁰.

Así las cosas, el punto de partida comienza en el artículo 32 EAC que establece que *“todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en*

⁹⁹ PLA BOIX, AM., “La llengua al nou estatut...”, *op. cit.*, p. 271

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 263

cuanto a la lengua, plena validez y eficacia”. Este precepto, además de resaltar el tan consagrado principio de no discriminación, alude a la oficialidad de la lengua catalana con un concepto que no permite margen de dudas “plena validez y eficacia”. Los siguientes artículos, en cambio, van ciñéndose a un ámbito en concreto, siendo el primero la Administración Pública. En este sentido, dispone el artículo 33.1 EAC que *“en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan*”. El precepto en su totalidad garantiza expresamente el derecho de opción lingüística de los ciudadanos en sus relaciones con los poderes públicos, así como con las entidades privadas que dependen cuando ejercen funciones públicas. Se establece que este derecho conlleva una correlativa carga para estos entes, los cuales no pueden descuidar la lengua oficial empleada por el ciudadano. El reconocimiento de este derecho lingüístico es idéntico al que se realiza en el ámbito en cuestión en la CAV y en la zona vascófona de la CFN. Por su parte, el artículo 34 EAC recoge sobre el ámbito socioeconómico que *“todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios*”. El ámbito de la enseñanza también muestra similitudes respecto a la CAV y de esta manera, se destaca del artículo 35 EAC que *“todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria*”. No obstante, este precepto resalta el catalán como lengua vehicular y es que, como ya se ha ido mencionando en este apartado, se percibe un gran esfuerzo por resaltar el catalán en todos los ámbitos e incluso darle preferencia ante el castellano. Por tanto, en la CAC tiene preferencia y se protege en especial lo que para la CAV sería el modelo D de enseñanza, en la que el catalán se configura como lengua docente prevalente (se analizará la controversia suscitada con la Ley de Educación catalana en el apartado 6.1).

5.2.4 Comunidad Autónoma de Galicia.

A lo largo de su historia, la lengua gallega ha vivido épocas doradas y oscuras, y sus hablantes han sido víctimas de una marginación que los ha llevado a una profunda situación de diglosia. La supervivencia de la lengua está amenazada, se ha llegado

incluso a dar el fenómeno de la no transmisión familiar. Desde la instauración de la democracia, la aprobación del Estatuto de Autonomía¹⁰¹, la Ley de Normalización Lingüística¹⁰² y el Plan General de Normalización de la lengua Gallega¹⁰³, la lengua goza de reconocimiento oficial, pero su situación todavía dista mucho de la plena normalización social e institucional¹⁰⁴.

Establece el artículo 5 EAG que “1. *La lengua propia de Galicia es el gallego*. 2. *Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos*. 3. *Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y, dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento*. 4. *Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua*”. En 1983, el compromiso que asumen los poderes públicos en la redacción del EAG se traduce en la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística, que regula el uso del gallego en distintos ámbitos, tal y como se ha analizado en los apartados anteriores. En primer lugar, cabe destacar el artículo 6.2 LNL en el ámbito de las administraciones públicas que establece, como ocurre en la CAV, en la zona vascofona y mixta de la CFN y en la CAC, que “*las actuaciones administrativas en Galicia serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada*”. En segundo lugar, en relación con los medios de comunicación social, “*el gallego es la lengua usual en las emisoras de radio y televisión y los demás medios de comunicación social sometidos a gestión o competencia de las instituciones de la Comunidad Autónoma*”, según lo establecido en el artículo 18 de la LNL. Por su parte, las disposiciones sobre el uso de la lengua en la enseñanza se recogen en los artículos 12 a 17 LNL y entre otros, se destaca que “*el gallego, como lengua propia de Galicia, es también lengua oficial en la enseñanza en todos los niveles educativos*”. Merece mención el Decreto 124/2007¹⁰⁵ por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo, en cuyo

¹⁰¹ Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (BOE n.º 101, de 28 de abril de 1981).

¹⁰² Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística. Comunidad Autónoma de Galicia (DOG n.º 84, de 14 de julio de 1983).

¹⁰³ https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-lingua/estandar/PNL22_24_textointegro.pdf

¹⁰⁴ PARDO VUELTA, M., “Panorámica sociolingüística de la lengua gallega (s. XX-XXI)”, *Confluenze Revista di studi iberoamericani*, Vol. 7, No. 2, 2015, p. 62

¹⁰⁵ Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se regula el uso y la promoción del gallego (DOG n.º 125 de 29 de junio de 2007)

articulado no se reconoce el modelo de inmersión, similar al modelo D de la CAV. En todo caso, se realizan cinco distinciones respecto del uso del gallego en este ámbito. En la educación infantil, regulada en el artículo 7, *“el profesorado usara en la clase la lengua materna predominante entre el alumnado”*. En la educación primaria, regulada en el artículo 8, *“el gallego se impartirá obligatoriamente en las áreas de matemáticas, conocimiento del medio natural, social y cultural y educación para la ciudadanía y derechos humanos, garantizando la competencia lingüística propia del nivel en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma”*. En la educación secundaria obligatoria, regulada en el artículo 9, *“se impartirán en gallego ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, matemáticas y educación para la ciudadanía”*. En cuanto al bachillerato, regulado en el artículo 10, *“el alumnado recibirá por lo menos, el 50% de su docencia en gallego”*. Por su parte, en la formación profesional específica, enseñanzas artísticas y deportivas, reguladas en el artículo 11, *“se impartirán en gallego los módulos profesionales que decida la dirección”*. Por último, el artículo 46 de la Ley 2/2012 de protección general de las personas consumidoras y usuarias¹⁰⁶, establece que *“los consumidores, en sus relaciones de consumo, tienen derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales de la CAG, siempre que la contratación se haya realizado o el consentimiento se haya manifestado en el territorio de la CAG, así como en los supuestos de publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales recibidas en Galicia”*.

Para dar por cerrado este apartado debe hacerse mención al Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega redactado en 2004. Se trata de un plan exhaustivo, recogido en un documento de 324 páginas, cuya intención es dotar a la LNL de un programa de acciones específicas en diversos campos, que van desde el sector público a la promoción y protección de la lengua en el ámbito familiar, para así facilitar el cumplimiento e implementación efectivos de esta Ley. En su elaboración, fruto de un proceso participativo, colaboraron representantes de los diferentes grupos políticos, técnicos y especialistas de los sectores implicados, así como representantes de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar el consenso social entorno a dicho plan. Desgraciadamente, todo el impulso con el que arrancó su implementación pronto quedó en papel mojado, y según denuncian los diversos informes publicados diez años

¹⁰⁶ Ley 2/2021, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias (DOG n.º 69, de 11 de abril de 2021)

después su implementación no solo no ha sido efectiva, sino que en muchos ámbitos se han producido retrocesos, habiéndose aprobado incluso decretos que lo contravienen¹⁰⁷.

6. CONTROVERSIAS.

La fragmentación de la opinión política, la envergadura que adquiere una materia como los derechos lingüísticos y la decisión de los tribunales es, en muchas ocasiones, razón de conflicto. Este apartado tiene como objetivo analizar cómo la normativa existente y sus posteriores reformas pueden generar controversias. Así, se procede a analizar dos de las controversias más recientes y sonoras de los últimos años respecto a los derechos lingüísticos.

6.1 Lengua vehicular tras la Ley Celaá.

La Ley Orgánica 3/2020 de Educación¹⁰⁸, más conocida como la Ley Celaá ha sufrido en su proceso de elaboración una gran controversia por muchos de los elementos que introduce y reforma respecto a la anterior Ley Orgánica de Educación. Entre ellas, la que más interés tiene respecto a estas páginas es la eliminación del castellano como lengua vehicular.

Así, la Ley Orgánica 8/2013¹⁰⁹ para la mejora de la calidad educativa introducía en su disposición trigésimo octava que *“las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”*, aludiendo explícitamente a que el castellano sería lengua vehicular. La expresión de lengua vehicular hace referencia a la lengua (o lenguas) que se utilizan y se enseñan tanto disciplinas lingüísticas como no lingüísticas, y cuál es la lengua para las comunicaciones dentro de un centro docente, es decir, no sólo en el aula sino en otros ámbitos como tutorías o momentos de recreo.

¹⁰⁷ PARDO VUELTA, M., “Panorámica sociolingüística...”, *op. cit*, p. 64

¹⁰⁸ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868 a 122953).

¹⁰⁹ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013).

En cambio, la redacción de la actual Ley Celaá elimina la referencia al castellano como lengua vehicular: *“Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”*. Ello supone que las CCAA adquieren la absoluta potestad de establecer como lengua vehicular sus respectivas lenguas cooficiales y esta circunstancia es la que ha generado la mayor crítica desde la oposición.

Ante ello, el PP ha afirmado que la LOMLOE es un proyecto "profundamente ideologizado" que trata de "asfixiar" al que no se somete al "pensamiento único", que "suprime la cultura del esfuerzo" y que "destierra" el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. También el diputado de Vox, Joaquín Robles, criticó duramente la reforma, afirmando que el objetivo de la norma es que las escuelas catalanas se conviertan en "fábricas de independentistas". "Con la Ley, se adquiere el certificado de legalidad", ha advertido, para tachar la norma de "sectaria" y "peligrosa"¹¹⁰. De esta manera, la oposición ha manifestado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma, con el argumento de que esta puede ir en contra de la redacción del artículo 3CE que reconoce el castellano como lengua de todo el territorio y establece que los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Habrá que esperar hasta la resolución del recurso para comprobar si realmente estamos ante una reforma inconstitucional o no.

6.2 Inmersión lingüística tras la Ley Molac.

De forma similar a lo ocurrido en el Estado español, el legislativo francés aprobó la Ley relativa a la protección patrimonial de las lenguas territoriales de Francia de 8 de abril de 2021, que ha sido bautizada como la Ley Molac¹¹¹, en la que se introducen, entre otros, elementos que refuerzan el vínculo entre patrimonio y lenguas, varios cambios en la enseñanza de las lenguas territoriales y medidas visibilizar su uso en el espacio público y solucionar problemas aparecidos durante los últimos años en el uso de las lenguas en documentos oficiales. Se debe tener en cuenta que en Francia las lenguas

¹¹⁰ <https://www.expansion.com/economia/2020/11/19/5fb693a4468aeb992a8b45c4.html>

¹¹¹ https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b2548_proposition-loi

regionales están muy debilitadas y siempre se ha optado por un sistema educativo único para una nación de ciudadanos “libres e iguales” como consagran los textos fundadores.

En este sentido, con el objetivo de fomentar el uso y aprendizaje de las lenguas regionales, se introdujeron preceptos que facilitan la inmersión lingüística en las escuelas públicas de regiones francesas donde se habla catalán, euskera, occitano, corso, alsaciano o bretón, siempre que padres y educadores lo soliciten. Así, el texto, entre otros, dispone que “*les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage*¹¹²”, es decir, como las lenguas y culturas regionales forman parte del patrimonio de Francia, se dará prioridad a su enseñanza en las regiones donde se utilizan.

Ante ello, 61 diputados franceses interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo Constitucional ya que la inmersión lingüística a la que alude la ley podría ser contraria al artículo 2 de la Constitución francesa que consagra el francés como la lengua oficial de la República.

Finalmente, lo que muchos juristas auguran que puede ocurrir con la eliminación del castellano como lengua vehicular de la Ley Celaá, el Consejo Constitucional francés declaró inconstitucional el precepto citado disponiendo que “*no pueden arrogarse (...) del derecho a usar otra lengua que no sea el francés, ni ser obligados a tal uso*”¹¹³.

7. REFLEXIONES FINALES

Las presentes páginas han resaltado la esencialidad de la lengua como cauce de comunicación entre los seres humanos. En este sentido, la lengua humaniza a las personas y permite que estas sean capaces de vivir en una comunidad donde priman las relaciones sociales, que interactuando entre ellas comparten, entre otras, ideas, reflexiones, peticiones o explicaciones. El desarrollo del lenguaje permite el crecimiento personal de los seres humanos, y a través de la adopción de una determinada lengua

¹¹² Article L312-10 de la Ley Molac.

¹¹³ <https://elpais.com/internacional/2021-05-21/el-constitucional-frances-veta-parcialmente-la-ley-que-permitia-la-inmersion-linguistica-en-francia.html>

capacita a las personas a construir un pensamiento propio y expresarlo de forma adecuada. Así mismo, el lenguaje se perfecciona a través de la educación, instrumento fundamental que permite adquirir competencias y potestades en múltiples ámbitos, y viceversa, ya que un adecuado desarrollo del lenguaje, y en consecuencia, el aprendizaje de una lengua, permitirá una correcta formación en diferentes materias. En todo caso, el aprendizaje de la lengua permite el máximo uso y disfrute de diversos derechos fundamentales, a saber, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia. En definitiva, las lenguas son más que herramientas de comunicación; son símbolos identificativos, sistemas de pertenencia y técnicas de unión, que permiten vivir y sobrevivir de forma libre y digna a las distintas comunidades.

En consecuencia, dada la gran importancia que tiene la lengua, los derechos lingüísticos son una garantía imprescindible en aras de otorgar protección a tan fundamental elemento inherente a las personas. Ahora bien, es relevante destacar la ausencia de un instrumento jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos lingüísticos en el plano internacional, teniendo en cuenta que la DUDL no tiene carácter oficial. En todo caso, los textos internacionales vigentes se limitan a hacer vagas menciones a la lengua y a recoger preceptos en los que se subraya el principio de no discriminación. Probablemente, tras este análisis, se pueda deducir que la Carta Europea de los Derechos Lingüísticos es la iniciativa normativa más satisfactoria hasta el momento. No obstante, es de considerar la dificultad que conlleva regular una materia tan amplia, a la vista de la diversidad de situaciones de las lenguas y las comunidades lingüísticas, pero no sirve de excusa. Delegar en los estados la tarea de regular la materia sin indicaciones aprobadas a nivel internacional y eludir la responsabilidad sobre la diversidad lingüística es huir de la protección de los derechos humanos y convertirse en cómplice de la desaparición de las lenguas minoritarias siendo estas sinónimo de una riqueza cultural absoluta y la mayor expresión de identidad social. La pérdida de estas lenguas no conllevan sólo un perjuicio para sus comunidades lingüísticas, sino para todos, ya que son el medio por el que se transmiten conocimientos tradicionales y estos son esenciales para el desarrollo sostenible y para la protección de la historia, del ser humano y del planeta.

Mientras que el planteamiento internacional siga manteniéndose como hasta ahora, corresponde a los estados el aseguramiento de los derechos y libertades de las

comunidades lingüísticas minoritarias y de los pueblos indígenas, que a través del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos deberá garantizarlas y protegerlas. En todo caso, los estados deben tomar en absoluta consideración que los avances en las distintas sociedades han generado posturas diferenciadas en lo cultural y en lo político, y en consecuencia la convivencia no está ajena al surgimiento de conflictos.

Merece por su parte destacar el esfuerzo que han realizado las comunidades autónomas del Estado español, mientras que se podría también reprochar la labor estatal en esta materia, más preocupada por intereses políticos que por proteger derechos humanos. De manera general, se puede afirmar que el reconocimiento de la existencia del bilingüismo en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia se ha definido en los textos legales desarrollados de las propias comunidades. Ahora bien, los Estatutos de Autonomía se ciñen únicamente, salvo en el caso de Cataluña, a declarar el carácter cooficial de las lenguas mayoritaria y minoritaria y proclaman la prohibición de discriminación por razón de lengua. Ha sido por tanto, la evolución de los textos legales autonómicos y sus posteriores desarrollos, como las Leyes de Normalización y los Planes de Fomento, la evidencia de que prima el interés por la protección y el fomento de las lenguas minoritarias, en consecuencia de la notoria vulnerabilidad de estas.

Así, el ser humano ha sido capaz de construir un mundo heterogéneo, donde aun primando el desacuerdo en múltiples aspectos, ha dado cabida a la diversidad en todos sus extremos, entre las cuales encontramos la lengua, que como ya se ha subrayado con anterioridad, no es una única y se manifiesta en lenguas diferentes, las cuales requieren de la misma protección. Como resultado de los flujos migratorios y la globalización que están caracterizando el mundo actual no es realista pensar que una lengua corresponde a un determinado territorio y por ello, es indispensable mantener e impulsar la protección de las comunidades lingüísticas para obtener una plena integración de todas ellas. Se deben establecer políticas basadas en el respeto y la no discriminación y hacer un correcto uso de la educación y solo así se obtendrá la satisfacción del máximo objetivo de los derechos lingüísticos, alcanzar una sociedad plurilingüista y tolerante.

8. FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

AUZMENDI, L., “La protección de las lenguas minoritarias en Europa: hacia una nueva década”, *Unidos por la diversidad*, 2011, pp. 7-9

ALBERTÍ ROVIRA, E., “*El régimen de doble oficialidad y los derechos y deberes lingüísticos*”, Estudios Jurídicos sobre la Ley de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1999, pp- 77-106

CORRAL PÉREZ, I., “Lenguas indígenas, identidad y marco legal en Hispanoamérica: Una aproximación ecolingüística”, *E-aesla*, n.º 2, 2006, pp. 188-200

ETXEBARRIA AROSTEGI, M., “Normalización del euskera y educación bilingüe”, *Estudios de Lingüística*, Universidad de Alicante n° 15, 2001, pp. 115-148

ESCIUTIA, M., “Chomsky, la naturaleza humana, el lenguaje y las limitaciones de la ciencia”, *Grupo Ciencia, Razón y Fe*, Facultad de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
<https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/chomsky-la-naturaleza-humana-el-lenguaje-y-las-limitaciones-de-la-ciencia>

FALCON GAJARDO, J., “Pueblos indígenas”, *Revista en cultura de la legalidad*, n°9, 2015-2016, pp- 232-239

GRAMSTAD S., “La protección de las lenguas minoritarias en Europa: hacia una nueva década”, *El mecanismo de control de la Carta: una perspectiva práctica*, 2011, pp. 29-30

GIOVINE YÁÑEZ, M.A., “La diversidad etnolingüística en México en el marco de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, *El español, lengua de traducción para la cooperación y el diálogo*, 2008, pp. 423-430

HAMEL RAINER, E., “Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas”, *Alteridades*, Vol. 5, n°10, 1995, pp. 11-23

HERRERAS, JC., “Políticas de normalización lingüística en la España democrática”, *actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, París, vol. 2, 2010, pp.20-34

HERSZENBAUN, MA., “Derecho abstracto y estado jurídico en el pensamiento político hegeliano”, *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, n° 21, enero 2015, pp.21-34

LAGERSPETZ, E., “Sobre los derechos lingüísticos”, *Isonomía, Revista de teoría y filosofía del derecho*, N°15, octubre 2001, pp.109-130

MAY, S., “Derechos lingüísticos como derechos humanos”, *Revista de Antropología Social*, 2009, pp. 131-159

MORENO FERNÁNDEZ, F., “La importancia internacional de las lenguas”, *Informes del Observatorio*, Instituto Cervantes, 2015.
<http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/es/informes/la-importancia-internacional-de-las-lenguas>

NÚÑEZ RIVERO, C., “La diversidad cultural como derecho fundamental de los pueblos indígenas”, *Revista de derecho UNED*, n.º 17, 2015, pp. 57-71

RODRIGUEZ OCHOA, JM., “Aplicación y desarrollo normativo de la Ley Foral del Vascuence en el ámbito de la Administración Foral de Navarra”, *Revista internacional estudios vascos*, n.º 46, 2001, pp. 545-592

ROJAS QUIÑONEZ, CM., “La diversidad lingüística en Colombia: protección jurídica de las lenguas indígenas”, *Pensamiento jurídico*, n.º 22, 2008, pp. 253-292

ROJO, G., “El lenguaje, las lenguas y la lingüística”, *Lalia*, Universidad de Santiago de Compostela, 1986, pp. 10-60

PARDO VUELTA, M., “Panorámica sociolingüística de la lengua gallega (s. XX-XXI)”, *Confluenze Revista di studi iberoamericani*, Vol. 7, No. 2, 2015, pp. 61-70

PÉREZ FERNÁNDEZ, JM., “La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias y su encaje en el modelo constitucional español: ¿Un tertium genus en el reconocimiento de los derechos lingüísticos?”, *Revista Española de Derecho constitucional*, núm. 89, mayo-agosto (2010), pp. 157-191

PLA BOIX, AM., “La llengua al nou estatut d'autonomia de catalunya”, *Revista d'estudis autonòmics i federals*, n.º 3, 2006, pp- 259-294

PLA BOIX, AM., “L'ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 a 1936: el procés de reconeixement de l'estatut d'oficialitat del català”, *Revista de Llengua i Dret*, núm. 43, 2005, pp. 179-211.

PONS PERERA, E., “Los derechos lingüísticos en el marco internacional y comunitario europeo”, *Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España*, 2006, pp. 65-104

SEGURA, B., “Derechos lingüísticos”, *El Notario del Siglo XXI*, N°23, enero-febrero 2009.<https://www.elnotario.es/practica-juridica/1706-derechos-lingueisticos-0-42126030700398637>

SKUTNABB-KANGAS, T., “Language Policy and Linguistic Human Rights” in RICENTO, T. (ed.) *An introduction to Language Policy, Theory and Method*. Blackwell, pp. 273-291.

SORIANO DÍAZ, R., “Derechos lingüísticos y derechos fundamentales”, *Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, n°41, 1999, pp. 13-22

VALADÉS, D., “El derecho a la lengua”, *Teoría y Realidad Constitucional*, num 18, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 39-96

VILCHES PLAZA, C., “Evolución de las actitudes ante el euskera de los universitarios de Navarra. 1992-2002”, Tesis Doctoral Universidad Pública de Navarra, Pamplona – Iruña, 2002, pp. 38 - 94

WINKELMANN, O., “Sobre la estandarización de las lenguas minoritarias de España”, *Lletres asturianas: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana*, n.º 53, 1994, pp. 7-17

YRIGOYEN FAJARDO, R., “Justicia y Multilingüismo. Pautas para alcanzar una Justicia Multilingüe en Guatemala”, *Programa de Justicia Checchi/AID*, 2001, pp. 73-96

NORMATIVA

Internacional

Asamblea General de las Naciones Unidas. "Declaración Universal de los Derechos Humanos." 217 (III) A. Paris, 1948.

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 2200 (XXI) A. Nueva York, 1966

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas”, Resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992.

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, Resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007.

Consejo de Europa. “Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o regionales hecha en Estrasburgo el 15 de noviembre de 1992”, BOE num 222, de 15 de septiembre de 2001, pp. 34724-34749

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, Barcelona, 1996.
https://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/02/dlr_espanyol.pdf

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003

Organización Internacional del Trabajo (OIT), *Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*, 27 Junio 1989

Nacional

Constitución Española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978)

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979)

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra (BOE n.º 195, de 16 de agosto de 1982, páginas 22054 a 22060)

Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (BOE n.º 101, de 28 de abril de 1981).

Ley Orgánica 6/2006, de 10 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE n.º 172 de 20 de julio de 2006)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868 a 122953).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013).

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera (BOE num. 160 de 16 de diciembre de 1982).

Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística. Comunidad Autónoma de Galicia (DOG n.º 84, de 14 de julio de 1983).

Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre del Euskera (BON n.º 154 de 17 de diciembre de 1986)

Ley 2/2021, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias (DOG n.º 69, de 11 de abril de 2021).

Decreto 138/1983, de 11 de Julio, del Departamento de Educación y Cultura, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco (BOPV n.º 108, de 19 de julio de 1983).

Decreto foral 159/1988, de 19 de mayo, por el que se regula la incorporación y uso del vascuence en la enseñanza no universitaria de Navarra (BON n.º 67 de 1 de junio de 1988).

Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV n.º 72, de 7 de abril de 1997).

Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra (BON n.º 19 de 12 de febrero de 2003).

Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (BOPV n.º 65, de 31 de marzo de 2003).

Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se regula el uso y la promoción del gallego (DOG n.º 125 de 29 de junio de 2007).

DOCUMENTOS

Comité de seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, “*Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos*”, Barcelona, abril 2009.

Consejo de Europa. “*La protección de las lenguas minoritarias en Europa*”, Servicio Central Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria- Gasteiz, 2011.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Alto Comisionado, “Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación”. Ginebra y Nueva York, 2010.

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, “*Derechos lingüísticos de las minorías lingüísticas*”, Ginebra, marzo 2017.